



# GACETA DEL CONGRESO

## SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXVIII - N° 844

Bogotá, D. C., lunes, 9 de septiembre de 2019

EDICIÓN DE 40 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO  
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO  
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO  
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA  
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

# SENADO DE LA REPÚBLICA

## PROYECTOS DE LEY

### PROYECTO DE LEY NÚMERO 173 DE 2019 SENADO

*por la cual se reforma la Ley 37 de 1990, se adopta el  
Código de Ética Profesional*

*del Economista y se dictan otras disposiciones.*

**El Congreso de Colombia**

**DECRETA:**

**TÍTULO I**

**DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN**

**CAPÍTULO I**

**Objeto**

**Artículo 1°. Objeto.** La presente ley tiene por objeto reformar la Ley 37 de 1990 y reglamentar el ejercicio de la profesión de Economista en Colombia, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución Política, reestructurar la conformación y las funciones del Consejo Nacional Profesional de Economía, establecer un Código de Ética Profesional, un régimen sancionatorio y el correspondiente proceso disciplinario para quienes resulten incurso en las faltas tipificadas en dicho Código.

**CAPÍTULO II**

**Del ejercicio de la profesión**

**Artículo 2°. Requisitos para ejercer la profesión de Economista.** Modifícase el artículo 1° de la Ley 37 de 1990, el cual quedará así:

Para poder ejercer legalmente y por término indefinido la profesión de Economista en el territorio nacional, se requiere estar inscrito en el registro profesional que llevará el Consejo

Nacional Profesional de Economía, condición que se acreditará con la presentación de la Matrícula Profesional de Economista.

**Parágrafo.** Para efectos de verificar la condición de inscrito, el oferente de servicios profesionales de economía tanto del sector público como privado, deberá tramitar ante el Consejo Nacional Profesional de Economía la expedición del certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios respectivos.

**Artículo 3°. Conductas que se esperan y las normas que rigen al Economista.** Adiciónase a la Ley 37 de 1990 el siguiente artículo:

Los Economistas, como individuos pertenecientes a una sociedad, están obligados a:

1. Cumplir y respetar estrictamente las normas constitucionales y legales vigentes.
2. Ejercer su profesión con consciencia y responsabilidad, guiados por las conductas de la profesión registradas en el Código de Ética Profesional del Economista y procurando el beneficio social.
3. Colaborar con las autoridades administrativas y judiciales en temas y aspectos relativos al ejercicio de la profesión.
4. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas contra el Código de Ética, de que tuviere conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión, aportando toda la información y pruebas que tuviere en su poder.

**Artículo 4°. De los papeles y documentos de trabajo.** Adiciónase la Ley 37 de 1990 con el siguiente artículo:

Mediante documentos de trabajo, el Economista dejará constancia de las labores realizadas para emitir su juicio profesional. Tales documentos son de propiedad exclusiva del Economista.

**Parágrafo.** Los documentos de trabajo podrán ser examinados por las autoridades legalmente facultadas; están sujetos a reserva en beneficio del Economista y la empresa a la cual presta sus servicios y además deberán ser conservados por un tiempo no inferior a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su elaboración.

### CAPÍTULO III

#### Actividades de la profesión del Economista

**Artículo 5°. Actividades del Economista.** *El artículo 11 de la Ley 37 de 1990 quedará así:*

En atención al riesgo social que puede implicar la toma de decisiones de carácter económico, en las siguientes actividades y cuando en ellas participe un profesional de la economía, de manera individual o en equipos interdisciplinarios, este las avalará con su firma y número de Matrícula Profesional.

1. Diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de propuestas de política pública económica, teniendo en cuenta sus implicaciones sociales.

2. Diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas macroeconómicas y su impacto económico en el comercio nacional e internacional.

3. Análisis de las proyecciones de población que permitan cuantificar necesidades de empleo y seguridad social.

4. Análisis de políticas de inserción de la economía colombiana en el contexto global.

5. Elaboración, evaluación y seguimiento de los planes de ordenamiento territorial.

6. Investigación, evaluación y valoración económica de los procesos de producción en los diferentes sectores económicos.

7. Elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo público en el orden nacional, departamental, distrital y municipal.

8. Avalar los presupuestos públicos de todo orden territorial para la ejecución de los planes de desarrollo.

9. Acreditación de la viabilidad económica, financiera y social de los proyectos que involucren recursos públicos de todo orden territorial.

10. Dirección de Centros y Departamentos de Investigación y Análisis Económico, en organizaciones de naturaleza pública y mixta y en los privados que adelanten investigaciones con recursos públicos de todo orden.

11. Dirección de las Secretarías de Hacienda y de Impuestos del orden territorial.

12. Participación en la elaboración, seguimiento y evaluación de estudios de factibilidad económica

en los planes, programas y proyectos de inversión pública.

13. Participación en la elaboración de estudios gubernamentales con miras al control de precios, tarifas y la creación de incentivos y subsidios para el sector privado.

14. Investigación o consultoría en materias o temas académicos propios de la economía, incluyendo el análisis financiero y sectorial.

15. Docencia en cátedras relacionadas con el estudio de la economía en todos los niveles de educación superior y la enseñanza media, autorizados por el Gobierno nacional.

16. Dirección de Programas de Pregrado y Posgrado en Economía, autorizados por el Gobierno nacional.

**Parágrafo 1°.** Sin la firma y el número de matrícula profesional de un Economista debidamente inscrito, los estudios y solicitudes relacionados en este artículo no podrán ser utilizados válidamente por los organismos, entidades o instituciones que los requieran. En caso de que participen varios Economistas, todos deberán acreditar la matrícula profesional.

**Parágrafo 2°.** Las firmas y organizaciones profesionales cuyas actividades comprendan alguna o algunas de las que, conforme a la ley, correspondan al ejercicio de la profesión de Economista, deberán contar para el efecto con un Economista, legalmente autorizado y bajo cuya responsabilidad y firma se desarrollarán aquellas actividades.

**Artículo 6°. Cargos para Economistas.** *Modifícase el artículo 7° de la Ley 37 de 1990, quedará así:*

Además de lo exigido en otros ordenamientos, se requiere tener la calidad de Economista con matrícula profesional de Economista en los siguientes casos:

1. Para desempeñar cargos privados o funciones públicas que impliquen el ejercicio de la profesión de Economista, en los términos previstos en el artículo 5° de la presente ley.

2. En la dirección de los Programas de Economía de las respectivas facultades y para regentar las cátedras básicas o espacios académicos de economía.

3. Para actuar como perito en controversias de carácter económico y como auxiliar de la justicia.

**Parágrafo 1°.** Para efectos de las cátedras básicas de Economía se entiende aquellas que constituyen el núcleo básico de formación profesional, tales como: Teorías económicas, teoría monetaria, teoría de las finanzas públicas, doctrinas económicas, desarrollo económico, política económica, economía internacional, sistemas económicos, planificación financiera y las que se definan por el Ministerio de Educación Nacional en la reglamentación correspondiente a la formación del Economista.

**Parágrafo 2°.** Para la toma de posesión de un cargo público o para desempeñarse en el sector privado, en

cargos en que se requiera un Economista, se exigirá como requisito para la misma la presentación de la matrícula profesional. Igualmente, se deberá tramitar ante el Consejo Nacional Profesional de Economía la expedición del certificado de vigencia de la inscripción y antecedentes disciplinarios.

**Artículo 7°. Experiencia Profesional.** *Adiciónese la Ley 37 de 1990 con el siguiente artículo.* Para efectos del Ejercicio de la economía, la Experiencia Profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional o certificado de inscripción profesional, por cuanto es a partir de su obtención que se puede ejercer válidamente la profesión.

En la descripción de funciones de los cargos a proveer o en las condiciones de los concursos, se aclarará si se exige experiencia profesional, en razón a que se trata de una actividad exclusiva de economista o si lo que se exige es experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo. En este último caso, se computará desde la fecha de terminación del pensum académico de Educación Superior.

**Artículo 8°. Ejercicio ilegal de la profesión de Economista.** *Modifícase el artículo 9° de la Ley 37 de 1990, el cual quedará así:*

La persona natural, que, sin cumplir los requisitos previstos en la presente ley, realice cualquier acto propio de la profesión de Economista o la ejerza ilegalmente, incurrirá en causal que lleve a las sanciones dispuestas por la autoridad penal, administrativa o de policía correspondiente. En igual infracción incurrirá la persona que, mediante avisos, propaganda, anuncios profesionales, instalación de oficinas, fijación de placas murales, se anuncie o se presente como Economista, sin serlo, de conformidad con el artículo 8° de la Ley 41 de 1969. El Consejo Nacional Profesional de Economía elevará la denuncia ante las autoridades competentes para que conozcan del hecho y procedan a las sanciones penales, administrativas o de policía que correspondan.

**Parágrafo.** Sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar, en los términos de la presente ley, también incurre en ejercicio ilegal de la profesión el Economista que, estando debidamente inscrito en el registro profesional, ejerza la profesión encontrándose suspendida su inscripción.

**Artículo 9°. Encubrimiento del ejercicio ilegal de la profesión.** *Adiciónese la Ley 37 de 1990 con el siguiente artículo:* El servidor público que, en el ejercicio de su cargo, autorice, facilite, patrocine, encubra o permita el ejercicio ilegal de la economía, incurrirá en falta disciplinaria, sancionable de acuerdo con las normas legales vigentes.

**Parágrafo.** Si quien permite, o encubre el ejercicio de la profesión, por parte de quien no reúne los requisitos establecidos en la presente ley, está matriculado e inscrito como economista, podrá ser suspendido del ejercicio legal de la profesión hasta por el término de cinco años.

**Artículo 10. Sanciones por ejercicio ilegal de la profesión.** *Adiciónese la Ley 37 de 1990 con el siguiente artículo.* El particular que viole las disposiciones relacionadas con el ejercicio legal de la profesión, sin perjuicio de las sanciones penales y de policía, será sancionado con multas de dos (2) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

**Parágrafo.** Las multas que se impongan como sanción por el incumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, deberán consignarse a favor del Tesoro Municipal del lugar donde se cometa la infracción y serán impuestas por el respectivo Alcalde Municipal o por quien haga sus veces, mediante la aplicación de las normas de procedimiento establecidas para la investigación y sanción de las contravenciones especiales, según el Código Nacional de Policía o norma que lo sustituya o modifique.

**Artículo 11. Aviso del ejercicio ilegal de la economía.** *Adiciónese la Ley 37 de 1990 con el siguiente artículo.* El Consejo Nacional Profesional de Economía (Conalpe), deberá dar aviso a todas las empresas relacionadas con la economía o que utilicen los servicios de economistas, de la denuncia que se instaure contra cualquier persona por ejercer ilegalmente la economía, utilizando todos los medios a su alcance para que se impida tal infracción, con el fin de proteger a la sociedad del eventual riesgo a que este hecho la somete.

**Artículo 12. Responsabilidad de las personas jurídicas.** *Adiciónese la Ley 37 de 1990 con el siguiente artículo.* La sociedad, firma, empresa u organización profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan a las descritas por esta ley y que buscan proteger a la sociedad del eventual riesgo a que este hecho la somete con el ejercicio de la economía, está obligada a incluir en su nómina permanente, como mínimo, a un profesional debidamente inscrito y matriculado.

**Parágrafo.** A la sociedad, firma, empresa u organización profesional que omita el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo se le sancionará con amonestación pública, de conformidad con artículo 36 de la presente ley.

#### CAPÍTULO IV

##### Del Consejo Nacional Profesional de Economía

**Artículo 13. Composición.** *Modifícase el artículo 4° de la Ley 37 de 1990, el cual quedará así:*

El Consejo Nacional Profesional de Economía estará integrado por cinco (5) miembros, así:

1. Dos representantes o delegados del señor Presidente de la República. En el acto de designación se definirá cuál de los delegados actuará como presidente del Consejo y representante legal del mismo.
2. Dos representantes de los decanos y/o directores de facultades o programas de economía



del país, uno en representación de las instituciones de educación públicas y otro en representación de las privadas, elegidos por los decanos o directores de facultades y programas respectivos, en reunión convocada por el Consejo Nacional Profesional de Economía, en asocio con la Asociación Colombiana de Facultades de Economía (Afadeco), o quien haga sus veces.

4. Un representante elegido por los colegios, sociedades o asociaciones de egresados de los programas de economía de las universidades legalmente constituidas, con actividad mínima de dos (2) años y con un número de socios no inferior a cincuenta (50). Dichas instituciones deberán acreditarse previamente ante el Consejo Nacional Profesional de Economía, su existencia y representación legal de la entidad, listado de los economistas afiliados y el acta de asamblea que los autoriza para presentarse a la elección. El Consejo Nacional Profesional de Economía reglamentará esta selección y convocará para tal efecto.

Los integrantes del Consejo Nacional Profesional de Economía deberán ser economistas titulados, con matrícula profesional y tarjeta profesional de economista, quienes serán nombrados por un período de dos (2) años, a excepción de los delegados del señor Presidente de la República, quienes tendrán el mismo período de este y podrán ser reelegidos, por el Presidente que inicia un nuevo periodo presidencial. Los demás miembros del Consejo, igualmente, podrán ser reelegidos.

El cargo de Miembro del Consejo Nacional Profesional de Economía se ejercerá ad honórem.

**Parágrafo 1°.** El Consejo Nacional Profesional de Economía tendrá un secretario general de libre nombramiento y remoción del Consejo, designado por este Consejo, quien deberá ser economista con matrícula profesional.

**Parágrafo 2°.** El Consejo Nacional Profesional de Economía es un organismo de derecho público, con autonomía económica, administrativa y financiera, con funciones de registro, encargado de la inspección, control y vigilancia del ejercicio de la profesión del economista en Colombia. Adicionalmente, actúa como órgano encargado de hacer efectivo el Código de Ética Profesional, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

**Parágrafo transitorio.** Una vez aprobada la presente ley, el Consejo Nacional Profesional de Economía que viene actuando, reglamentará los procesos de escogencia de los nuevos consejeros que deban ser elegidos por votación. Los demás serán designados por el Presidente de la República al concluir el período. Si el período se encuentra vencido, solo podrán ser designados una vez se elijan los miembros por elección.

**Artículo 14. Domicilio y funciones.** *Modifícase el artículo 5° de la Ley 37 de 1990, el cual quedará así:*

El Consejo Nacional Profesional de Economía tendrá domicilio en Bogotá, D. C., y ejercerá las siguientes funciones:

**1. Funciones relacionadas con la expedición de la matrícula, otorgamiento de la tarjeta profesional y el Registro Profesional de Economistas:**

a) Decidir, de conformidad con la Ley 37 de 1990, sobre las solicitudes de inscripción en el Registro Profesional de los Economistas;

b) Expedir la correspondiente Matrícula Profesional de Economista, a quienes cumplan los requisitos establecidos por la ley;

c) Expedir permisos temporales a economistas extranjeros, acorde a la reglamentación del Consejo Nacional Profesional de Economía;

d) Elaborar y mantener un registro actualizado de los economistas inscritos;

e) Fijar el valor de los derechos de matrículas, el cual no podrá exceder de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV); el valor del duplicado de la matrícula, el cual no podrá exceder del 25% del valor de la matrícula; el valor de las certificaciones de trámite y vigencia de la inscripción profesional; el de los antecedentes disciplinarios, el cual no podrá exceder la quinta parte de un SMMLV y fijar el valor de la expedición de los permisos temporales, que no podrá exceder el 50% del valor de la matrícula profesional;

f) Resolver sobre la suspensión o cancelación de la inscripción, conforme a lo previsto en la ley;

g) Emitir los certificados de trámite, vigencia de inscripción profesional y de antecedentes disciplinarios que sean solicitados por el interesado o por entidades públicas o privadas. Estos certificados tendrán una vigencia de seis (6) meses.

**2. Funciones relacionadas con la inspección y vigilancia sobre el ejercicio de la profesión y aplicación del Código de Ética Profesional:**

a) Fomentar el ejercicio de la profesión de economista dentro de los postulados de la ética profesional;

b) Conocer las denuncias que se presenten por faltas contra la ética profesional e imponer las sanciones a que haya lugar acorde al Código de Ética Profesional;

c) Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones comprobadas a las disposiciones legales que reglamentan el ejercicio profesional de la economía, y solicitar de las mismas la imposición de las penas correspondientes;

d) Adoptar su propia planta de personal de acuerdo con sus necesidades y el logro de los objetivos de inspección y vigilancia;

e) Realizar actividades de inspección y vigilancia en entidades públicas, privadas y mixtas que contraten economistas;

f) Crear los comités, académico, de desempeño profesional y ético, asignándoles las funciones básicas;

g) Dictar su propio reglamento interno.

### **3. Funciones relacionadas con la asesoría en distintos ámbitos de la actividad profesional:**

a) Promover, impulsar y apoyar académica y económicamente, tanto la profesión, como la investigación económica en el país, de conformidad con el reglamento que expida el Consejo;

b) Servir como órgano asesor y consultor del Estado en todos los aspectos relacionados con el ejercicio de la profesión de economista;

c) Propiciar la búsqueda permanente de la calidad en la enseñanza de la economía;

d) Pronunciarse sobre la legislación relativa al ejercicio de la profesión;

e) Defender públicamente el interés social que tiene la profesión de economista para el desarrollo del país;

f) Promover la contratación laboral de economistas en los sectores público, privado y mixto;

g) Participar en el fortalecimiento de la preparación y actualización de los planes de estudio de los distintos programas de formación de la profesión de economistas, de acuerdo a los requerimientos nacionales y regionales del país, dentro de la perspectiva de internacionalización de estos.

**Artículo 15. Recursos.** *Modifícase el artículo 6° de la Ley 37 de 1990, el cual quedará así:*

Constituyen recursos del Consejo Nacional Profesional de Economía los bienes que en la actualidad posee, o que haya adquirido de la nación para su funcionamiento; los recursos provenientes del cobro de derechos de inscripción y expedición de matrículas profesionales; de la expedición de duplicados, de certificados de trámite y vigencia de inscripción, y de antecedentes disciplinarios; de la expedición de permisos temporales a profesionales extranjeros; los rendimientos financieros producto de sus inversiones; de la realización de actividades propias del ámbito de sus competencias, y los recursos que le sean asignados del Presupuesto General de la Nación.

**Parágrafo 1°.** El Consejo Nacional Profesional de Economía aprobará y ejecutará, en forma autónoma, su presupuesto.

**Parágrafo 2°.** La Contraloría General de la República ejercerá control fiscal sobre el manejo de los recursos del Consejo Nacional Profesional de Economía.

**Artículo 16. Dirección y quórum decisorio.** *Adiciónese la Ley 37 de 1990 con el siguiente artículo:*

El Consejo Nacional Profesional de Economía será presidido por el representante del señor

Presidente de la República, designado con la calidad de Presidente del Consejo, sesionará al menos una vez al mes y podrá tomar decisiones cuando asistan mínimo las tres quintas partes de sus miembros y con el voto de la mayoría de los presentes. En ausencia del Presidente, la sesión podrá ser presidida por el otro consejero representante del Presidente de la República o por cualquiera de los miembros nombrado *ad hoc* por los presentes.

## **CAPÍTULO V**

### **De la inscripción del economista**

**Artículo 17. La inscripción del economista.** *Modifícase el artículo 2° de la Ley 37 de 1990, el cual quedará así:*

La inscripción como economista se acreditará por medio de la matrícula profesional expedida por el Consejo Nacional Profesional de Economía, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Ser nacional colombiano, en ejercicio de sus derechos civiles, o extranjero, domiciliado en Colombia.

2. Haber obtenido el título de economista en una institución de educación superior autorizada por el Gobierno nacional.

3. Haber obtenido el título de economista, expedido por instituciones extranjeras, de países con los cuales Colombia tiene celebrados convenios sobre reciprocidad de títulos y convalidado por el organismo gubernamental autorizado para el efecto.

4. Haber obtenido título de economista, expedido por instituciones extranjeras, de países con los cuales Colombia no tiene celebrados convenios sobre reciprocidad de títulos, convalidado por el organismo gubernamental autorizado para el efecto.

5. Haber obtenido el título de doctor en economía, otorgado por una institución colombiana de educación superior autorizada por el Gobierno nacional o por instituciones extranjeras, sin tener título en pregrado de economía; este título deberá estar debidamente convalidado por el organismo gubernamental autorizado para tal efecto.

**Parágrafo 1°.** No serán válidos, para el ejercicio de la profesión de economista, los títulos honoríficos y, por lo tanto, el Consejo Nacional Profesional de Economía no podrá expedir matrícula profesional con base en dicho título.

**Parágrafo 2°.** No podrá ser inscrito como economista, quien se halle en interdicción judicial o se encuentre cumpliendo pena privativa de la libertad. Si ya se encuentra inscrito, el Consejo Nacional Profesional de Economía procederá a su suspensión.

**Parágrafo 3°.** Para ser inscrito en el Consejo Nacional Profesional de Economía, el interesado deberá presentar ante la secretaría del mismo, una solicitud acompañada de fotocopia del diploma y acta de grado que acredite el título obtenido.

Para títulos profesionales expedidos en el exterior, se deberá allegar a la solicitud, el diploma

que acredite el título obtenido debidamente consularizado o apostillado, según el caso, y la resolución de convalidación del mismo expedido por el organismo gubernamental autorizado para el efecto.

**Parágrafo 4°.** Si la solicitud del interesado cumple con los requisitos establecidos, el Consejo Nacional Profesional de Economía procederá a hacer la inscripción mediante resolución motivada dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. Si el Consejo Nacional Profesional de Economía encontrase que la inscripción es improcedente, por carencia de alguno de los requisitos legales para efectuarla, así lo expresará en resolución motivada, contra la cual solo procede el recurso de reposición ante el mismo Consejo, en la forma y los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Artículo 18. Obligación de las universidades.** *Modifícase el artículo 17 de la Ley 37 de 1990, el cual quedará así:*

Las instituciones de educación superior autorizadas para expedir título de economista, deben remitir de oficio al Consejo Nacional Profesional de Economía la relación certificada de las personas a las cuales otorguen dicho título, para que puedan tramitar la matrícula correspondiente. Dicha relación deberá contener el nombre completo de la persona a la cual se le otorga el título e indicar el número del documento de identidad, así como el número del acta de grado por medio del cual se otorga el respectivo título.

## CAPÍTULO VI

### De los profesionales extranjeros

**Artículo 19. Permiso temporal.** *Adiciónase a la Ley 37 de 1990 el siguiente artículo:*

Quien posea el título académico de economista, esté domiciliado en el exterior y pretenda vincularse bajo cualquier modalidad contractual para ejercer temporalmente la profesión en el territorio nacional, deberá obtener del Consejo Nacional Profesional de Economía, un permiso temporal para el ejercicio, si no cuenta con el certificado de inscripción profesional y/o la matrícula profesional. Dicho permiso temporal tendrá validez por un (1) año y podrá ser renovado discrecionalmente por el Consejo Nacional Profesional de Economía, hasta por el plazo máximo del contrato o de la labor contratada, previa presentación de solicitud suficientemente motivada, por parte de la empresa contratante o por el profesional interesado o su representante; título o diploma debidamente consularizado o apostillado, según el caso; fotocopia del contrato que motiva su actividad en el país, la refrendación o convalidación del título por el organismo gubernamental autorizado para tal efecto, y el recibo de consignación de los derechos respectivos.

**Parágrafo 1°.** El economista extranjero, durante la validez del permiso temporal, deberá dar cumplimiento estricto a las normas que

regulan el ejercicio de la profesión y se someterá al procedimiento disciplinario cuando cometa infracciones contra la ética profesional.

**Parágrafo 2°.** Se eximen de la obligación de tramitar el permiso temporal al que se refiere el presente artículo, los profesionales extranjeros invitados a dictar conferencias, seminarios, simposios, congresos y talleres de economía, siempre y cuando no tengan carácter permanente.

**Parágrafo 3°.** Si el profesional beneficiario del permiso temporal pretende domiciliarse en Colombia, y laborar o prestar servicios profesionales de manera indefinida en el país, deberá tramitar su inscripción profesional y obtener su matrícula profesional.

**Artículo 20. Adopción del Código de Ética Profesional.** Adóptese el siguiente Código de Ética Profesional para los Economistas que será de obligatoria observancia por parte de los economistas de conformidad con la Ley 41 de 1969 y Ley 37 de 1990.

## TÍTULO II

### CÓDIGO DE ÉTICA DEL ECONOMISTA

#### CAPÍTULO I

##### Principios orientadores

**Artículo 21. El honor y la dignidad.** El honor y la dignidad de su profesión deben constituir para el economista, su mayor orgullo. Para enaltecer su profesión y coadyuvar a su engrandecimiento, ajustará todos los actos de su vida profesional a este Código de Ética Profesional.

**Artículo 22. Función social del ejercicio de la economía.** El economista obrará siempre teniendo en cuenta que en el ejercicio de sus actividades, no solamente desarrolla una labor profesional, sino que también cumple una función social indispensable para el desarrollo económico del país y el bienestar de los colombianos.

**Artículo 23. El Código de Ética Profesional regla de conducta.** El presente Código de Ética Profesional del Economista se constituye en regla de conducta exigida para el buen ejercicio de la economía, dentro de los principios constitucionales y legales que enmarcan la toma de decisiones de los profesionales de la economía.

**Parágrafo.** Los economistas, para todos los efectos del Código de Ética Profesional y del régimen disciplinario, contemplado en esta ley, se denominarán en adelante, el profesional o los profesionales.

**Artículo 24. Defensa de los intereses morales y profesionales.** En el ejercicio de su profesión, el Economista deberá defender los intereses morales y profesionales de sus colegas y propender por el avance científico de la profesión; por lo tanto, los profesionales están obligados a ajustar sus actuaciones a las siguientes disposiciones, que constituyen su Código de Ética Profesional.



## CAPÍTULO II

**Derechos, deberes, prohibiciones,  
inhabilidades, incompatibilidades y conflicto  
de intereses**

**Artículo 25. *Derechos de los economistas.*** Los profesionales podrán:

1. Ejercer su profesión, de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus reglamentos, asumiendo responsabilidades acordes con su formación.

2. Contar con adecuadas garantías que faciliten el cabal cumplimiento de sus funciones, cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia pública o privada.

**Artículo 26. *Deberes de los economistas.*** Son deberes de los economistas los siguientes:

1. Anteponer los valores de la nacionalidad y los intereses de la patria y la sociedad a cualesquiera otros.

2. Defender los intereses morales y profesionales de sus colegas y propender por el avance científico de la profesión.

3. Cumplir con los requerimientos, citaciones y demás diligencias que formule u ordene el Consejo Nacional Profesional de Economía.

4. Suscribir todos sus actos profesionales con el número de matrícula profesional de economista.

5. Custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información que por razón del ejercicio de su profesión, se le hayan encomendado o a los cuales tenga acceso; impidiendo o evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos, de conformidad con los fines a que hayan sido destinados.

6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a todas las personas con quienes tenga relación con motivo del ejercicio de la profesión.

7. Registrar en el Consejo Nacional Profesional de Economía su domicilio o dirección de residencia, teléfono y el correo electrónico, dando aviso oportuno de cualquier cambio.

8. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas contra este Código de Ética Profesional, que tuviere conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión, aportando toda la información y pruebas que tuviere en su poder.

9. Velar por el prestigio de la profesión.

10. Ajustar los medios de propaganda o publicidad, a las reglas de la prudencia y el decoro profesional, sin hacer uso de medios de publicidad con avisos exagerados, que den lugar a equívocos sobre su especialidad o idoneidad profesional.

11. Respetar y reconocer la propiedad intelectual de los profesionales.

12. Mantener el secreto y la reserva, respecto de toda circunstancia relacionada con el cliente y con

los trabajos que para él se realicen, salvo obligación legal de revelarla.

13. Manejar con honestidad y pulcritud los fondos que el cliente le confíe con destino a desembolsos exigidos por los trabajos a su cargo y rendir cuentas claras, precisas y frecuentes. Todo ello, independientemente y sin perjuicio, de lo establecido en las leyes vigentes.

14. Dedicar toda su capacidad para atender, con la mayor diligencia y probidad, los asuntos encargados por su cliente.

15. Dirigir el cumplimiento de contratos, entre sus clientes y terceras personas, ante todo como asesores y guardianes de los intereses de sus clientes, dentro del marco de las normas legales vigentes y en ningún caso, les es lícito actuar en perjuicio de aquellos terceros.

16. Actuar de manera objetiva, cuando por las funciones de su cargo público o privado, sean responsables de fijar, preparar o evaluar pliegos de condiciones, de licitaciones o concursos.

17. Respetar a los profesionales que se hallen vinculados entre sí, ya sea en la administración pública o privada, y sin perjuicio de la relación de jerarquía, por su condición de colegas.

18. Atender los demás deberes, incluidos en la presente ley, y los indicados en todas las normas legales y técnicas relacionadas con el ejercicio de su profesión.

**Artículo 27. *Deberes para con los demás profesionales de la disciplina.*** Son deberes de los profesionales de que trata el Código de Ética Profesional contenido en esta ley:

1. Ser solidario con sus colegas, evitando comentarios que afecten su imagen y crédito personal.

2. No usar métodos de competencia desleal con los colegas.

3. Abstenerse de emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación de colegas, señalando errores profesionales en que estos incurrieren, a no ser que medien algunas de las siguientes circunstancias:

i. Que ello sea indispensable por razones ineludibles de interés general.

ii. Que se haya dado anteriormente, a dichos profesionales, la posibilidad de reconocer y rectificar aquellas actuaciones y errores, haciendo ellos caso omiso.

4. Reconocer y respetar los valores humanos y profesionales.

5. Denunciar, a la instancia competente, toda práctica que conlleve el ejercicio ilegal e inadecuado de la profesión.

6. Compartir con los colegas nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y administrativos, de modo que contribuya a su progreso profesional.

7. Respetar y reconocer la propiedad intelectual y aportes profesionales a la economía, de los demás profesionales.

8. Abstenerse de realizar, contribuir o permitir que se cometan actos de injusticia, en perjuicio de otro profesional, tales como la aplicación de penas disciplinarias, sin causa demostrada y justa.

**Artículo 28. Prohibiciones a los economistas.**

Son prohibiciones generales a los economistas:

1. Nombrar, elegir, influir, posesionar o tener a su servicio, a personas que pretendan ejercer ilegalmente la profesión, para el desempeño de un cargo privado o público que requiera ser ejercido por economistas, en forma permanente o transitoria.

2. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal, de la profesión regulada por esta ley.

3. Ejecutar actos simulados, así como prestar intencionalmente su concurso a operaciones fraudulentas o cualesquiera otras que tiendan a ocultar la realidad financiera o económica de sus clientes, con perjuicio del interés público o privado.

4. Formular conceptos y opiniones que, en forma pública o privada, tiendan a perjudicar moral o profesionalmente a otro economista, a sus clientes o a terceros.

5. Realizar en forma directa o por interpuesta persona, gestiones encaminadas a desplazar o sustituir, en desleal competencia, a un colega en asuntos profesionales de los que este se esté ocupando.

6. Recibir, exigir y ofrecer honorarios o cualquier retribución, diferente a la inicialmente contratada por la persona o entidad, en favor de cualquiera de las partes.

7. Exponer, a los usuarios de sus servicios profesionales, a riesgos injustificados.

8. Aceptar o ejecutar trabajos para los cuales el economista o sus asociados no sean considerados idóneos.

9. Fundamentar la inscripción como economista, en documentos que posteriormente fueren encontrados falsos o adulterados.

10. Ejecutar, en el lugar donde ejerza su profesión, actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres.

11. Incumplir, reiterada e injustificadamente, las obligaciones civiles, comerciales o laborales que haya contraído con ocasión del ejercicio de su profesión o de actividades relacionadas con esta.

12. Causar, intencional o culposamente, daño o pérdida de bienes, elementos, equipos, herramientas o documentos que hayan llegado a su poder, como consecuencia del ejercicio de su profesión.

13. Incumplir las decisiones disciplinarias que imponga el Consejo Nacional Profesional de Economía u obstaculizar su ejecución.

14. Solicitar o recibir, en forma directa o por interpuesta persona, gratificaciones, dádivas o

recompensas en razón del ejercicio de su profesión, salvo autorización contractual o legal.

15. Participar en licitaciones, concursar o suscribir contratos estatales cuyo objeto esté relacionado con el ejercicio de la economía, estando incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades que establecen la Constitución y la ley.

16. Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones legales vigentes, o aceptar tareas que excedan la competencia que le otorga el título.

17. Firmar, a título gratuito u oneroso, trabajos profesionales que no hayan sido estudiados, controlados, dirigidos o ejecutados personalmente.

18. Realizar, contribuir o permitir la expedición de títulos, diplomas, matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional y/o certificados de vigencia de matrícula profesional, a personas que no reúnan los requisitos legales o reglamentarios.

19. Figurar en anuncios, membretes, sellos, propagandas y demás medios análogos, junto con el de personas que ejerzan ilegalmente la profesión.

20. Conceder comisiones, participaciones u otros beneficios ilegales o injustificados, con el objeto de gestionar, obtener o acordar nombramiento de índole profesional.

21. Utilizar, para la aplicación en trabajos profesionales propios, y sin autorización de sus legítimos autores: estudios, *software*, y demás documentación perteneciente a aquellos, salvo que la tarea profesional lo requiera, caso en el cual se deberá dar aviso al autor.

22. Difamar, denigrar o criticar a sus colegas, o contribuir en forma directa o indirecta a perjudicar su reputación o la de sus proyectos o negocios, con motivo de su actuación profesional.

23. Designar o influir para que sean designados en cargos que deban ser desempeñados por los profesionales de que trata la presente ley, a personas carentes de los títulos y calidades que se exigen legalmente.

24. Revisar trabajos de otro profesional, sin conocimiento y aceptación previa del mismo, a menos que este se haya separado completamente de tal trabajo.

25. Ofrecer la prestación de servicios cuyo objeto, por cualquier razón de orden técnico, jurídico, reglamentario, económico o social, sea de dudoso o imposible cumplimiento, o aquella, que por circunstancias de idoneidad personal, no pudiese satisfacer.

**Artículo 29. Impedimento después del retiro de un empleo público.** El economista que haya sido empleado público, no podrá gestionar directa o indirectamente, a título personal o en representación de terceros, asuntos de cualquier naturaleza ante la entidad o empresa a la cual prestó sus servicios, durante el año siguiente a la fecha de su retiro.



**Artículo 30. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades que afectan el ejercicio profesional.** El economista vulnera el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en los siguientes casos:

1. Cuando un economista sea requerido para actuar como árbitro en controversias de orden económico, al aceptar tal designación, si tiene con alguna de las partes parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad o, si median vínculos económicos, de enemistad grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle imparcialidad y objetividad a sus conceptos o actuaciones profesionales.

2. Cuando un economista, actuando como funcionario del Estado, y dentro de sus funciones oficiales, hubiere propuesto, dictaminado o fallado en determinado asunto, recomiende o asesore personalmente a favor o en contra de las partes interesadas en el mismo negocio. Esta prohibición se extiende por el término de un (1) año contado a partir de la fecha de su retiro del cargo.

3. Cuando un economista haya auditado, inspeccionado, vigilado o controlado, en su carácter de funcionario público, a personas naturales o jurídicas, prestare a las mismas, servicios profesionales como asesor, empleado o contratista. Esta prohibición se extiende por el término de un (1) año contado a partir de la fecha de su retiro del cargo.

4. Cuando un economista haya actuado como asesor, empleado o contratista de un ente económico aceptare el cargo o función de árbitro en controversias de orden económico, de la misma entidad o de su subsidiaria y/o filiales, por lo menos durante seis (6) meses después de haber cesado sus funciones.

5. Cuando un economista actúe simultáneamente como asesor, empleado o contratista de más de una empresa que desarrolle idénticas actividades, y en un mismo tema, ejerza actividades o funciones sin el expreso consentimiento y autorización de los entes económicos.

6. Las demás inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución y la ley.

CAPÍTULO III

Procedimiento disciplinario

SECCIÓN PRIMERA

Principios rectores del procedimiento disciplinario

**Artículo 31. Principios rectores del procedimiento disciplinario.** El profesional que sea investigado por presuntas faltas a la ética profesional, tendrá derecho a que la investigación se realice respetando su derecho al debido proceso y al ejercicio de su defensa; de conformidad con las leyes preexistentes al acto que se le impute y con observancia del proceso disciplinario, previsto en la

presente ley, en los reglamentos y en los siguientes principios rectores:

1. **Legalidad:** Solo será sancionado el profesional cuando por acción u omisión, en la práctica de la economía, incurra en las faltas a la ética contempladas en la presente ley y en otras disposiciones vigentes sobre la materia.

2. **Respeto y dignidad humana:** El profesional, en todo caso, tiene derecho a ser tratado con el respeto debido a su dignidad.

3. **Presunción de inocencia:** El profesional tiene derecho a ser asistido por un abogado durante todo el proceso y a que se le presuma inocente, mientras no se le declare responsable en fallo ejecutoriado.

4. **La duda se resuelve a favor del disciplinado:** La duda razonada se resolverá a favor del profesional inculcado.

5. **Doble instancia:** Toda providencia interlocutoria podrá ser apelada por el profesional, salvo las excepciones previstas en la ley. El superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando el sancionado sea apelante único.

6. **Igualdad frente a la ley:** El profesional tiene derecho a ser tratado con igualdad frente a la ley.

7. **Publicidad:** En la investigación se respetará y aplicará el principio de publicidad. Las partes tienen derecho a conocer integralmente el desarrollo de la investigación.

8. **Imparcialidad:** En la investigación se evaluarán los hechos y circunstancias favorables y desfavorables a los intereses del disciplinado.

9. **Criterios auxiliares:** La jurisprudencia, la doctrina y la equidad son criterios auxiliares en el juzgamiento.

SESIÓN SEGUNDA

Clasificación y límites de las faltas

**Artículo 32. Clasificación de las faltas.** Las faltas disciplinarias son: leves graves y gravísimas.

**Artículo 33. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta.** El Consejo Nacional Profesional de Economía determinará si la falta es leve, grave o gravísima, de conformidad con los siguientes criterios:

1. El grado de culpabilidad.

2. El grado de perturbación a terceros o a la sociedad.

3. La falta de consideración con sus clientes, patronos, subalternos y, en general, con todas las personas a las que pudiera afectar el profesional disciplinado con su conducta.

4. La reiteración en la conducta.

5. La jerarquía y mando que el profesional disciplinado tenga dentro de su entidad, sociedad y/o la persona jurídica a la que pertenece o representa.

6. La naturaleza de la falta y sus efectos, según la trascendencia social de la misma, el mal ejemplo dado, la complicidad con otros profesionales y el perjuicio causado.

7. Las modalidades o circunstancias de la falta, teniendo en cuenta el grado de preparación, el grado de participación en la comisión de la misma y el aprovechamiento de la confianza depositada en el profesional disciplinado.

8. Los motivos determinantes, según se haya procedido por causas innobles o fútiles, o por nobles y altruistas.

9. El haber sido inducido por un superior a cometerla.

10. El confesar la falta antes de la formulación de cargos, haciéndose responsable de los perjuicios causados.

11. Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que le sea impuesta la sanción.

**Artículo 34. Falta contra la ética.** Constituye falta contra la ética de la profesión de economista, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, el ejercicio ilegal de la profesión, el incumplimiento por parte de sociedades, firmas, empresas u organizaciones profesionales de lo señalado en el artículo 12 de la presente ley, el incumplimiento de los deberes profesionales, la incursión en prohibiciones profesionales, inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la presente ley, además de las sanciones civiles y penales a que haya lugar. Los economistas que infrinjan las disposiciones de la presente ley o las normas especiales y reglamentarias de la materia, se harán acreedores a las sanciones que establece la presente ley.

**Artículo 35. Sanciones.** Se establecen las siguientes sanciones para los economistas que violen las normas vigentes sobre el ejercicio profesional y ético de la economía.

1. Amonestación pública.

2. Suspensión de la matrícula profesional hasta por un (1) año.

3. Cancelación de la inscripción y la correspondiente matrícula, por el término que se indique en la sanción.

**Artículo 36. Amonestación pública por faltas leves culposas.** La amonestación pública implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe ser anotada en el registro. Son causales de amonestación pública, las siguientes:

1. El ejercicio de la profesión sin la obtención de la matrícula o permiso temporal.

2. Anunciarse como profesional, mediante avisos, sin haber reunido los requisitos exigidos en la presente ley para el ejercicio profesional.

3. No atender los deberes establecidos en los artículos 26 y 27 y las prohibiciones del artículo 28 de la presente ley, de acuerdo con la gravedad de la

falta calificada por el Consejo Nacional Profesional de Economía.

**Artículo 37. Suspensión por faltas graves culposas.** La suspensión implica la separación del ejercicio de la profesión de Economista, por el término señalado en el fallo. Serán causales de suspensión de la matrícula o permiso temporal:

1. La violación de la reserva profesional, conforme a las reglas de la materia.

2. La enajenación mental, cuando se le declare la interdicción judicial.

3. La embriaguez habitual.

4. La drogadicción comprobada.

5. Quien se halle en interdicción judicial o se encuentre cumpliendo una pena privativa de la libertad.

6. No atender los deberes establecidos en los artículos 21 y 22 y las prohibiciones del artículo 23 de la presente ley, de acuerdo con la gravedad de la falta calificada por el Consejo Nacional Profesional de Economía.

7. Incurrir en las casuales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas en el artículo 25 de la presente ley.

8. Haber sido sancionado tres (3) veces durante los dos (2) últimos años con amonestación pública.

9. Las demás previstas en leyes especiales.

El Economista que sea sancionado con la suspensión de su inscripción profesional, no podrá ejercer durante el período de la misma, actividades o funciones profesionales de Economista, *so pena* de hacerse merecedor de las sanciones contempladas en la presente ley.

**Artículo 38. Cancelación de la inscripción y la matrícula profesional por faltas gravísimas, dolosas o realizadas con culpa gravísima.** Serán causales de cancelación de la inscripción y de la matrícula o del permiso temporal:

1. Haber fundamentado la solicitud de inscripción o de permiso temporal en documentos que fueren encontrados falsos o adulterados, previa comprobación con las autoridades correspondientes.

2. Haber ejercido la profesión, durante el tiempo de suspensión de la matrícula o permiso temporal.

3. Haber sido declarado interdicto por demencia, mediante sentencia ejecutoriada.

4. La existencia de una sentencia judicial que imponga como pena accesoria la privación del derecho de ejercer la profesión.

5. Haber sido sancionado dos (2) veces durante los dos (2) últimos años con suspensión de la matrícula profesional o permiso temporal.

**Parágrafo.** La cancelación de la inscripción y la matrícula profesional será por el tiempo que se indique en la sanción y su rehabilitación de la misma se hará a petición del profesional sancionado.

## SESIÓN TERCERA

**Circunstancias de agravación, atenuación y exclusión de la sanción**

**Artículo 39. *Circunstancias de agravación.*** La sanción disciplinaria se aplicará teniendo en cuenta las siguientes circunstancias de agravación:

1. Existencia de antecedentes disciplinarios en el campo ético y profesional durante los cuatro (4) años anteriores a la comisión de la falta.

2. Reincidencia en la comisión de la falta investigada dentro de los cuatro (4) años siguientes a su sanción.

3. Aprovechamiento, por parte del profesional, de la posición de autoridad que llegare a ocupar.

**Artículo 40. *Circunstancias de atenuación.*** La sanción disciplinaria se aplicará teniendo en cuenta las siguientes circunstancias de atenuación:

1. Ausencia de antecedentes disciplinarios, en el campo ético y profesional, durante los cuatro (4) años anteriores a la comisión de la falta.

2. Demostración previa de buena conducta y debida diligencia en el ejercicio de la profesión.

**Artículo 41. *Circunstancias que justifican la falta disciplinaria.*** La conducta se justifica cuando se comete:

1. Por fuerza mayor o caso fortuito.

2. En estricto cumplimiento de un deber legal.

3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, emitida con las formalidades legales, siempre y cuando, no contraríe las disposiciones constitucionales y legales”.

**Artículo 42. *Concurso de faltas disciplinarias.*** El profesional que con una o varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones del Código de Ética Profesional o varias veces la misma disposición, quedará sujeto a la sanción más grave.

## SESIÓN CUARTA

**Actuaciones procesales**

**Artículo 43. *Motivación de las decisiones disciplinarias y término para adoptar decisiones.*** Todas las decisiones interlocutorias y los fallos que se profieran en el curso de la actuación disciplinaria deberán motivarse.

Las decisiones que requieran motivación se tomarán en el término de diez días y las de impulso procesal en tres, salvo disposición en contrario.

**Artículo 44. *Utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).*** Para la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), siempre y cuando su uso no atente contra los derechos y garantías constitucionales. Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y conservadas en medios técnicos y su contenido se consignará por escrito sólo cuando sea estrictamente necesario.

**Artículo 45. *Acceso al expediente.*** El investigado tendrá acceso a la queja y demás partes del expediente disciplinario, sólo a partir del momento en que sea escuchado en versión libre y espontánea o desde la notificación de cargos, según el caso.

**Artículo 46. *Formas de notificación.*** La notificación de las decisiones disciplinarias puede ser: personal, por estado, en estrados, por edicto o por conducta concluyente.

Las decisiones que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas a la dirección de correo electrónico del disciplinado o de su defensor, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente

## CAPÍTULO IV

**Procedimiento Ordinario**

**Artículo 47. *Iniciación del proceso disciplinario.*** El proceso disciplinario profesional se iniciará:

1. De oficio.

2. Por queja escrita, interpuesta por cualquier persona, natural o jurídica; esta deberá formularse, por cualquier medio, ante el Consejo Nacional Profesional de Economía.

**Parágrafo.** En los casos de público conocimiento o cuando se tratare de un hecho notorio, cuya gravedad lo amerite, a juicio del Consejo Nacional Profesional de Economía, podrá iniciarse, de oficio, la investigación disciplinaria.

**Artículo 48. *Designación de la sala investigadora.*** Una vez recibida la queja o informe de autoridad competente, o que se inicie de oficio la investigación, el Consejo Nacional Profesional de Economía, en sesión ordinaria, dispondrá la apertura de las diligencias preliminares, una vez se advierta que existe mérito para ello. En el mismo auto se designará una sala disciplinaria conformada por tres (3) consejeros y uno de ellos será el ponente. El consejero ponente orientará y dirigirá el correspondiente proceso disciplinario y someterá a la sala la ponencia de decisión y se adoptará la misma mediante resolución motivada. La segunda instancia recaerá en la sala en pleno del Consejo, de conformidad con el artículo 62 de la presente ley.

**Artículo 49. *Ratificación de la queja.*** Una vez proferido el auto de apertura de las Diligencias Preliminares, el Consejero Ponente, solicitará al quejoso la ratificación de su queja bajo la gravedad del juramento dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. La diligencia de ratificación de queja se podrá llevar a cabo de forma verbal, electrónica o por escrito. En caso de renuencia del quejoso a rendir o presentar la ratificación de su queja bajo la gravedad del juramento, dentro del término establecido anteriormente, y por carecer, la queja, de elementos de juicio suficientes que permitan proseguir de



oficio el proceso disciplinario, el Consejero Ponente ordenará el archivo de la queja a través de Auto motivado.

**Artículo 50. *El quejoso.*** El quejoso no es sujeto procesal en la investigación ético-disciplinaria y su intervención se limita únicamente a ratificar y a ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, o a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo o del fallo absolutorio. Para estos efectos podrá conocer el expediente en la secretaría del Consejo Nacional Profesional de Economía.

#### SESIÓN PRIMERA

##### Indagación preliminar

**Artículo 51. *Diligencias Preliminares.*** El Consejero Ponente adelantará las diligencias preliminares, en un plazo no superior de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de ratificación de la queja, o contados a partir de la fecha del Auto de Apertura en los casos en que las diligencias preliminares se inicien de oficio o en virtud de informe de autoridad competente. Durante dicho plazo se podrá prorrogar por el mismo término, en caso de ser necesario. Se decretarán y practicarán las pruebas que el ponente considere pertinentes y que conduzcan al esclarecimiento de los hechos.

**Artículo 52. *Propósito de la investigación preliminar.*** La investigación preliminar tiene como propósito, verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si esta es constitutiva de falta disciplinaria e identificar al profesional que presuntamente intervino en ella.

**Parágrafo.** Para cumplir con la finalidad que persigue la investigación preliminar, el consejero ponente, hará uso de los medios de prueba legalmente disponibles.

**Artículo 53. *Informe y calificación del mérito de la investigación preliminar.*** Terminada la etapa de investigación preliminar y dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, se calificará el mérito de lo actuado y, mediante auto motivado, se determinará si existe o no mérito para adelantar la investigación formal disciplinaria en contra del profesional investigado. En caso afirmativo, se le formulará, en el mismo auto, el correspondiente pliego de cargos. Si no se encontrare mérito para seguir la actuación, se ordenará, en la misma providencia, el archivo del expediente y la notificación de la decisión adoptada al quejoso y al o los profesionales investigados.

**Artículo 54. *Notificación auto de apertura de las diligencias preliminares.*** Una vez evacuada la diligencia de ratificación de queja, el Consejero Ponente notificará personalmente del Auto de apertura de la investigación preliminar al Economista inculpado de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En caso de no poder efectuar la notificación del auto en mención, se procederá a la notificación por edicto y se continuará con la actuación.

**Artículo 55. *Archivo definitivo.*** El Consejero Ponente dispondrá, a través de auto motivado, el archivo definitivo de la investigación preliminar cuando aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, por falta de ratificación de la queja. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada.

#### SESIÓN SEGUNDA

##### Investigación Disciplinaria

**Artículo 56. *Notificación del pliego de cargos.*** La Secretaría del Consejo Nacional Profesional de Economía, notificará personalmente el pliego de cargos al profesional inculpado. En el evento de no ser posible la notificación personal, esta se hará, mediante correo certificado, o por edicto, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si transcurrido el término de la notificación por correo certificado o por edicto, el inculpado no compareciere, se proveerá el nombramiento de un apoderado de oficio, de la lista de abogados inscritos ante el Consejo Superior de la Judicatura, con quien se continuará la actuación. El apoderado de oficio que resulte designado, asumirá plenamente las funciones y responsabilidades que le son propias, según lo previsto en la ley para tal efecto.

**Artículo 57. *Traslado del pliego de cargos.*** Surtida la notificación, se dará traslado de esta, al profesional inculpado o en su defensor por el término improrrogable de diez (10) días hábiles, para presentar descargos, solicitar y aportar las pruebas que considere necesarias. Para tal efecto, el expediente permanecerá a su disposición en la Secretaría del Consejo Nacional Profesional de Economía.

**Artículo 58. *Etapa probatoria.*** Vencido el término de traslado, el Consejero Ponente decretará las pruebas solicitadas por el investigado y las demás que de oficio considere conducentes y pertinentes, lo cual deberá ser comunicada al profesional disciplinado. El término probatorio será de noventa (90) días hábiles.

#### SESIÓN TERCERA

##### Evaluación de la investigación

**Artículo 59. *Decisión de la evaluación.*** Sólo se podrá adoptar una decisión sancionatoria cuando exista certeza, fundamentada en plena prueba, sobre la existencia del hecho violatorio del Código de Ética Profesional y sobre la responsabilidad del profesional.

**Artículo 60. *Fallo.*** Vencido el término probatorio y de alegatos de conclusión previstos, el Consejero Ponente evaluará el material probatorio y someterá a la Sala Disciplinaria el proyecto de sanción, la cual se discutirá ampliamente y se aprobará y decidirá por la mayoría de votos y por medio de resolución motivada se impondrá la sanción correspondiente

o la exoneración de la responsabilidad ética del profesional.

**Artículo 61. Notificación del fallo.** La decisión adoptada por la Sala Disciplinaria, se notificará personalmente al investigado. Si no fuere posible la notificación personal, esta se realizará por edicto, de acuerdo a lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En el evento de que el fallo proferido absuelva de responsabilidad ética disciplinaria al profesional implicado, esta providencia será comunicada al quejoso de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 del Código General Disciplinario.

#### SESIÓN CUARTA

##### Recursos

**Artículo 62. Clases de recursos y sus formalidades.** Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales se interpondrán por escrito.

**Parágrafo.** Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno.

**Artículo 63. Oportunidad para interponer los recursos.** Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de expedición de la respectiva decisión hasta el vencimiento de los cinco (5) días hábiles siguientes a la última notificación.

Si la notificación de la decisión se hace en estrados, los recursos deberán interponerse y sustentarse en el curso de la respectiva audiencia o diligencia. Si las mismas se realizaren en diferentes sesiones, se interpondrán en la sesión donde se produzca la decisión a impugnar.

**Artículo 64. Recurso de reposición.** El recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que se pronuncia sobre la nulidad y la negación de la solicitud de copias o pruebas al investigado o a su apoderado.

Los recursos de reposición deberán interponerse personalmente y por escrito con el lleno de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal de la providencia o desfijación del edicto emplazatorio. En el caso de los quejosos las decisiones de archivo definitivo o fallo absolutorio sólo podrán ser impugnadas a través de recurso de reposición dentro del término de la comunicación de la decisión establecido en el artículo 109 del Código General Disciplinario.

**Artículo 65. Trámite del recurso de reposición.** Cuando el recurso de reposición se formule por escrito debidamente sustentado, vencido el término para impugnar la decisión, se mantendrá en Secretaría por tres días en traslado a los sujetos procesales. De lo anterior se dejará constancia en el expediente. Surtido el traslado, se decidirá el recurso.

**Artículo 66. Recurso de apelación.** El recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: la que niega la práctica de pruebas

solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia.

**Artículo 67. Segunda instancia.** Contra los fallos proferidos por la Sala Disciplinaria procederá el recurso de apelación que se someterá a la consideración del Consejo Nacional Profesional de Economía, en pleno, el cual podrá aceptar, aclarar, modificar o revocar el fallo de primera instancia. Si la mayoría de los miembros asistentes a la sesión aprueban el proyecto de decisión, se adoptará la misma mediante resolución motivada.

#### CAPÍTULO VI

##### Disposiciones Varias

**Artículo 68. Vigencia de la sanción.** Las sanciones impuestas por violaciones al presente régimen disciplinario, empezarán a computarse a partir de la fecha de la ejecutoria del acto administrativo sancionatorio, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Artículo 69. Aviso de la sanción.** De toda sanción disciplinaria impuesta a un Economista, a través de la Secretaría del Consejo Nacional Profesional de Economía, se dará aviso a la Procuraduría General de la Nación y a todas las entidades que tengan que ver con el ejercicio profesional correspondiente. Los certificados de Antecedentes Disciplinarios que expida el Consejo Nacional Profesional de Economía deberán tener las anotaciones de las providencias sancionatorias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición. El listado de los Economistas sancionados será publicado mensualmente en la página web del Consejo Nacional Profesional de Economía.

**Artículo 70. Prescripción de la acción.** La acción disciplinaria a que se refiere el presente título prescribe en cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se cometió el último acto constitutivo de la falta.

**Artículo 71. Nulidad.** Los sujetos procesales podrán solicitar en cualquier etapa de la investigación y antes de proferirse el fallo de primera instancia la nulidad de las actuaciones procesales en el evento que se configuren las causales de nulidad previstas en el Código General Disciplinario. Estas solicitudes serán resueltas a través de auto motivado por la Sala Disciplinaria, previo informe que realice el Consejero Ponente dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de su recibo. El trámite de las nulidades procesales se regulará de acuerdo a lo previsto en el Código General Disciplinario, en lo no previsto en este artículo.

**Artículo 72. Revocatoria directa.** Los fallos sancionatorios podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado, por el Consejo Nacional Profesional de Economía. Los fallos sancionatorios son revocables sólo cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deben fundarse. Igualmente, cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales. Las solicitudes de

revocatoria directa de los actos sancionatorios serán tramitadas de conformidad con lo previsto por el Código General Disciplinario, en lo que sea pertinente.

**Parágrafo.** Los procesos disciplinarios que se encuentren en curso al momento de entrar en vigencia la presente ley, se continuarán con arreglo a la norma anterior. No obstante, siempre se aplicará la más favorable al disciplinado.

**Artículo 73. La notificación de las sanciones acorde a la reglamentación legal.** En la aplicación de las sanciones el Consejo Nacional Profesional de Economía seguirá las normas establecidas por esta ley, y de ser necesario se acudirá al Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019 y el Procedimiento Sancionatorio determinado en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Artículo 74. Aspectos no regulados.** En los aspectos no contemplados en el presente Código de Ética Profesional se seguirá el Código General del Proceso, El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General Disciplinario, o la norma que los reemplace o sustituya, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones.

**Artículo 75. Derogatorias.** Artículos 3°, 8°, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley 37 de 1990.

**Artículo 76. Vigencia.** La presente ley rige desde su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.



**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**PROYECTO DE LEY NÚMERO 173 DE 2019  
SENADO**

*por la cual se reforma la Ley 37 de 1990, se adopta el Código de Ética del Economista y se dictan otras disposiciones.*

Honorables miembros del Congreso de la República:

En ejercicio de la iniciativa como congresista me permito presentar a consideración del Honorable Congreso de la República el presente proyecto de ley que tiene una trascendental importancia para el ejercicio profesional de los Economistas en Colombia. Se trata de una propuesta de reforma integral a la Ley 37 de 1990, que a su vez modificó la Ley 41 de 1969 “por la cual se dictan normas sobre el ejercicio de la profesión de economista” o Estatuto Profesional del Economista, con el

propósito de ajustar dichas disposiciones a la Constitución Política, en concreto, al artículo 26: Adicionalmente y dentro de la misma materia se busca renovar el Código de Ética Profesional, que data del año 1977, adoptado mediante el Decreto 1268 del 6 de junio de dicho año, permitiendo la incorporación de los más significativos cambios legislativos relacionados con el proceso disciplinario contemplado en el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019 y el procedimiento disciplinario consagrado en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, todo con el objeto de un mejor posicionamiento de la profesión en la sociedad, recomponer la representación de la sociedad y del Estado en el Consejo Nacional Profesional de Economía y garantizar el cumplimiento eficiente de las funciones de este como entidad de regulación profesional.

**1. ANTECEDENTES GENERALES**

**1.1. Proyecto de ley tramitado en el año 2008**

El ejercicio de buscar una reforma a la Ley 37 de 1990 ya se intentó en el 2008, cuando se presentó el Proyecto 272 de 2008 Cámara y 314 Senado, “Por el cual se reforma la Ley 37 de 1990 y se dictan otras disposiciones. (Ley del Economista)”, el cual sufrió múltiples cambios en su trámite legislativo y finalmente cumplió con los debates en la Cámara y en el Senado pero fue Archivado por Tránsito de Legislatura. En términos generales, la experiencia fue positiva, por cuanto se pudo depurar muchos aspectos pertinentes al ejercicio de la profesión de Economista y su deslinde de actividades de profesiones que pudieran ser cercanas, tales como los profesionales de la Administración de Empresas, los Contadores y los profesionales de Finanzas Internacionales y por ello se rescatan en el presente proyecto de ley. Los Representantes Ponentes: Berner Zambrano Erazo, Jaime Restrepo Cuartas, Héctor Fáber Giraldo C. y en el Senado el Senador ponente fue Jorge Eliécer Guevara.

**1.2 Sobre la vigencia del articulado de la Ley 37 de 1990:**

La Ley 37 de 1990 durante su vida jurídica ha sufrido algunas modificaciones, entre las cuales se pueden destacar las siguientes:

**Artículo 3°. Derogado por los artículos 62 y 63 del Decreto 2150 de 1995.** Para que los títulos expedidos por las facultades o escuelas universitarias de que trata esta ley tengan validez, el interesado deberá obtener su registro en el Ministerio de Educación Nacional.

“Artículo 62. Supresión del registro estatal de títulos profesionales. Suprímase el registro estatal de los títulos profesionales.

**Artículo 63. Registro de títulos en las instituciones de educación superior.** A las instituciones de educación superior legalmente reconocidas por el Estado corresponderá llevar el registro de los títulos profesionales expedidos dejando constancia



del número de registro en el diploma y en el acta de grado.

*Dicho número se otorgará con sujeción a las reglas que para tal efecto expida el Gobierno nacional. Cada 6 meses, las instituciones de educación superior remitirán a las autoridades competentes que determine el Gobierno nacional, un listado que incluya el nombre, número de registro y profesión de los graduados”.*

**Artículo 4°. El literal a) fue derogado por la Ley 962 de 2005, artículo 64 y el Decreto 1953 de 1994.**

*Artículo 64. Créase el Consejo Nacional Profesional de Economía el cual quedará integrado en la siguiente forma:*

*a) ~~El Ministro de Educación Nacional o su delegado;~~*

*b) El Presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas o su representante;*

*c) Un representante de las facultades de Economía que funcionen legalmente en el país, elegido por los decanos respectivos;*

*d) Dos Economistas debidamente inscritos y miembros de una asociación regional afiliada a la Sociedad Colombiana de Economistas, designados por el Presidente de la República.*

*Los delegados de los miembros del Consejo Nacional Profesional de Economía, deberán representar el mismo sector que representa su principal.*

*Los integrantes del Consejo Nacional que se crea en el presente artículo deberán ser Economistas titulados y matriculados a excepción del señor Ministro de Educación o su delegado.*

*Los miembros a que se refieren los literales c) y d) tendrán un período de dos (2) años y no serán reelegibles.*

**Parágrafo 1°. El Consejo así formado tendrá un secretario permanente designado por el mismo Consejo.**

**Parágrafo 2°. El Consejo Nacional Profesional de Economía es una entidad de Derecho Público, ~~adscrita al Ministerio de Educación Nacional~~ y será su asesor en asuntos relacionados con su profesión.**

**La adscripción al Ministerio de Educación Nacional, fue derogada tácitamente por el Decreto 1953 de 1994,** que no incluyó al Consejo Nacional Profesional de Economía en la estructura del Ministerio de Educación Nacional, norma que fue ratificada posteriormente mediante los Decretos 88 de 2000, 2803 de 2001 y 276 de 2004.

**Artículo 8°. El Decreto 01 de 1984 fue derogado por la Ley 1437 de 2011 en su totalidad.** A las providencias que dicte el Consejo Nacional Profesional de Economía, se aplicará el procedimiento establecido en el Decreto 01 de 1984 y su aplicación surte efecto ante el Ministerio de Educación Nacional.

En virtud del principio de integración normativa frente a esta derogatoria se tiene que aplicar la norma que la sustituye, esto es, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, a las decisiones o providencias tanto administrativas como disciplinarias que dicte el Consejo Nacional Profesional de Economía. Específicamente, este artículo hace referencia a los recursos que se pueden presentar contra los actos que dicte el Consejo Nacional Profesional de Economía.

**Artículo 12. Subrogado por el artículo 340 de la Constitución Política y la Ley 152 de 1994.** *La Sociedad Colombiana de Economistas, será un órgano consultor del Gobierno nacional en todos los niveles, en la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo social y económico. En las comisiones que integre para este fin, debe incluir un representante de la Sociedad Colombiana de Economistas y las respectivas asociaciones regionales lo serán a nivel regional, departamental, municipal y distrital.*

Esta norma establecía que la Sociedad Colombiana de Economistas, entidad de carácter privado, tenía una función de órgano consultor del Gobierno nacional en materia de planes y programas de desarrollo social y económico. Sin embargo, pese a lo anterior y en virtud de haber sido subrogado por el artículo 340 de la Constitución Política y la Ley 152 de 1994, hoy no se ejerce esta función.

De esta manera, resulta importante establecer que la función de asesor y consultor del Estado correspondería directamente al Consejo Nacional Profesional de Economía, como entidad de carácter público que regula y vigila el ejercicio profesional, absorbiendo consultas, emitiendo opiniones profesionales o dirimiendo conflictos académicos.

Todos los demás artículos se encuentran vigentes.

## **2. FUNCIONES DE LOS CONSEJOS PROFESIONALES**

De acuerdo al desarrollo jurisprudencial que se ha presentado sobre los Consejos Profesionales, las competencias que la ley atribuye a los consejos están agrupadas en tres grupos de funciones. Estas son:

1. Las funciones relacionadas con la expedición de la matrícula y la tarjeta profesional, el registro profesional, las licencias temporales para el ejercicio de la profesión y la calificación de actividades afines.

2. Las funciones relacionadas con el Código Ético Profesional o disciplinario y la inspección y vigilancia sobre el ejercicio de la profesión, y

3. Las funciones de asesoría en distintos ámbitos de la actividad profesional.

Es importante resaltar que dentro de las disposiciones constitucionales actuales, particularmente en virtud de lo dispuesto en los artículos 26 y 103 de la Carta, las autoridades públicas pueden delegar en consejos, colegios o en asociaciones profesionales privadas el cumplimiento de ciertas funciones públicas.

**“Artículo 26.** *Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La Ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.*

*Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La Ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles”.*

**“Artículo 103.** *Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.*

*El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”.*

Teniendo en cuenta esos tres grupos generales de funciones se podría decir que los Consejos Profesionales deben cumplir con las siguientes funciones particulares:

1. Velar por la idoneidad de las personas que ejercen una profesión reconocida por la normatividad colombiana, estableciéndose formas de autocontrol, de preservación y de mejoramiento de la preparación, la idoneidad, la ética y la eficiencia de quienes, en el campo de la actividad respectiva, habrán de ejercer su profesión. Normalmente adelanta las siguientes actividades:

a) Exigir requisitos a sus afiliados, en el campo de la formación académica, de la experiencia y del prestigio;

b) Vigilar la conducta de los profesionales en el ejercicio profesional, su rendimiento, la calidad de sus servicios y su actualización permanente, garantizarle a la sociedad la idoneidad del profesional.

2. Dictar sus propios reglamentos.

3. Expedir certificaciones de la correspondiente profesión.

4. Ordenar el ejercicio de las profesiones.

5. Expedir tarjetas profesionales, matricular o registrar profesionales, según lo determine la ley.

6. Actuar como órgano consultivo permanente en el ámbito de la formación.

7. Investigar disciplinariamente a sus miembros e imponer las sanciones correspondientes, según lo ordena la ley.

8. Las demás que le sean delegadas, sin intervenir en el directo ejercicio del derecho al

trabajo, a la libre escogencia de profesión u oficio u otro derecho fundamental.

### **3. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CERTIFICADOS O MATRÍCULAS RESPECTO DEL DERECHO A EJERCER UNA PROFESIÓN U OFICIO.**

La Corte Constitucional clarificó la naturaleza jurídica de los certificados o matrículas respecto del derecho a ejercer una profesión u oficio. En este sentido determinó que el certificado no otorga el derecho sino que lo reconoce. Esto es importante porque significa que las certificaciones o matrículas no pueden agregar requisitos nuevos, a los que se exigen por las Instituciones de Educación superior o la ley para adquirir el derecho a una determinada titularidad profesional. En la Sentencia C-606 de 1992 señaló la Corte:

**Ahora bien, el legislador en ejercicio de sus funciones y para proteger al interés general contra el ejercicio ilegítimo de una profesión u oficio, puede establecer que para el ejercicio de determinadas profesiones es necesaria la matrícula profesional, que corresponde simplemente a la constatación pública de que el título profesional es legítimo. Dicha matrícula puede condicionar también el ejercicio del derecho al cumplimiento de ciertas normas éticas, acorde a un código debidamente expedido y respetuoso del debido proceso.**

**Para la expedición de la matrícula, una vez obtenido el título y según lo dispone el artículo 89, serán necesarios simplemente aquellos documentos que acrediten la veracidad del mismo.**

**El titular legítimo de la matrícula, tarjeta, licencia o certificado, podrá ejercer libremente la profesión mientras no infrinja una de las normas éticas, especialmente establecidas para cada profesión. Si se produjera tal violación, la autoridad administrativa correspondiente podrá imponer las sanciones establecidas, y suspender el derecho al ejercicio profesional, por el tiempo que considere necesario de acuerdo a las normas establecidas, o someterlo a las condiciones que el propio código señale. Contra la sanción impuesta deberán proceder los recursos contenciosos pertinentes. (...)**

**Así las cosas, la parte del artículo 10 en la que se señala que quien no tenga licencia profesional debidamente otorgada no puede ejercer la profesión, ni desempeñar las funciones establecidas en la ley, ni hacer uso del título, ni de otras abreviaturas comúnmente usadas para denominar la profesión de topógrafos, en placas membretes, tarjetas, anuncios, avisos o publicaciones, está simplemente señalando los efectos negativos de la licencia, los cuales deben ser estudiados a la luz del derecho constitucional.**

**Se reitera que el legislador está facultado para exigir títulos de idoneidad que garanticen la protección del interés general en el ejercicio**

*profesional. En este sentido la licencia es simplemente la constatación pública de la existencia de dicho título y de su validez”.*

**El derecho a ejercer la profesión se adquiere con el título académico debida y legítimamente expedido. Los requisitos adicionales están dirigidos a acreditar tal condición y por lo tanto no pueden imponer exigencias distintas a las de probar la veracidad del título”.**

#### **4. PRINCIPALES CAMBIOS QUE SE PROPONEN EN EL PRESENTE PROYECTO DE LEY.**

- Ratificar la naturaleza jurídica y su vinculación a la estructura del Estado Colombiano, del Consejo Nacional Profesional de Economía, de acuerdo con la Constitución de 1991 y ejercer las funciones de inspección y vigilancia de la profesión de Economista sin la necesidad de estar adscrito a un Ministerio.

- Mantener la exigencia de la Matrícula Profesional para efectos del ejercicio de la profesión y castigar su incumplimiento.

- Se aclara desde la ley, cómo se debe computar la experiencia Profesional para ser reconocida en el ejercicio de actividades propias de los economistas.

- Actualizar el Código de Ética Profesional, señalando con claridad las prohibiciones, deberes, derechos, inhabilidades e incompatibilidades y la graduación de las conductas, de acuerdo a la gravedad o levedad de las mismas y las sanciones aplicables de acuerdo con ello.

- Dar mayor capacidad de operación del Consejo Nacional Profesional de Economistas al establecer un mayor número de actividades que son propias del ejercicio profesional de los Economistas. Igualmente se deben señalar mayores funciones del Consejo Nacional Profesional de Economía en la promoción académica.

- Recuperar el carácter de órgano consultor del Gobierno nacional y regional en asuntos económicos.

- Consagrar una mayor participación de los gremios profesionales en la composición del Consejo Nacional Profesional de Economía.

#### **Resumen del proyecto de ley**

Con base en las consideraciones expuestas, a continuación, se hace una presentación de los principales temas desarrollados en el proyecto de ley:

Los puntos más importantes que desarrolla el proyecto de ley son los siguientes:

a) En el artículo 5° del proyecto se amplían las actividades del Economista a dieciséis (16) frente a las siete (7) que establecía el artículo 11 de la Ley 37 de 1990;

b) En el artículo 7° se adiciona un nuevo artículo a la Ley 37 de 1990, en donde se aclara que la Experiencia Profesional se debe computar desde la Expedición de la Matrícula profesional. Tema

que ha sido estudiado por la Corte Constitucional en Sentencia C-296 del 18 de abril de 2012, en donde declaró exequible el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, o ley que reglamenta el ejercicio de la profesión de Ingenieros y en donde se señala el cómo computar la experiencia profesional para estos profesionales. Así las cosas, la sentencia manifiesta:

6.1.10. Como conclusión sobre este punto se puede afirmar que desde el año 1932 con el Acto Legislativo 01, y con la reglamentación que le sobrevino, la exigencia impuesta por el Legislador de contar con un título de idoneidad para el ejercicio de la ingeniería, implica que para su ejercicio en el territorio nacional, se debe contar con una autorización de tipo oficial por el riesgo social que implica dicha profesión. Lo anterior significa que, para ejercer de manera legal tal actividad es necesario contar con la matrícula o certificado profesional. Esto plantea implícitamente, la cuestión que se debate con ocasión de la presente acción, y es desde cuándo se comienza a computar la experiencia profesional de las personas que se dedican al ejercicio de la ingeniería, profesiones afines o auxiliares. Sobre esta cuestión se puede establecer preliminarmente que históricamente la normatividad en torno al tema de la profesión de la ingeniería ha establecido que en razón del riesgo social de dicho oficio, el profesional debe tener la matrícula para ejercer legal y libremente la profesión en el territorio nacional. (Sentencia C- 296 del 18 de abril de 2012);

b) El artículo 13 del proyecto establece la naturaleza jurídica de la entidad de forma clara y concisa. Se recompone los miembros del Consejo Nacional Profesional de Economía y se hace una clara alusión a la participación democrática de los gremios de Economistas;

c) En el artículo 14 del proyecto se hace una presentación más técnica sobre las funciones del Consejo Nacional Profesional de Economía, que se presentan desde tres perspectivas así:

**1. La expedición de la matrícula, la tarjeta profesional y el registro profesional de Economista:**

**2. La inspección y vigilancia sobre el ejercicio de la profesión y aplicación del Código de Ética Profesional:**

**3. La asesoría en distintos ámbitos de la actividad profesional;**

d) El artículo 15 del proyecto de ley amplía los conceptos por los cuales el Consejo Nacional Profesional de Economía adquiere recursos propios con la expedición de certificados de trámite, vigencia de la inscripción, antecedentes disciplinarios y expedición de permisos temporales a extranjeros;

e) En el Capítulo V del proyecto se establece la obligatoriedad del Economista de suscribir sus actuaciones profesionales con el número de su matrícula profesional, el llevar papeles de trabajo de sus gestiones profesionales y de observar las normas jurídicas que regulan su profesión;

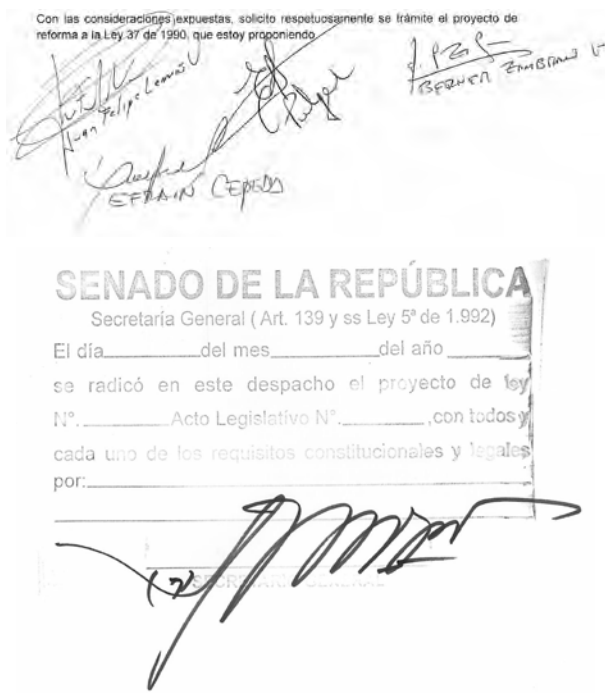


f) En el Capítulo VI se establece la posibilidad de otorgar permisos temporales a extranjeros que desarrollen actividades profesionales en el país. Al igual que los nacionales deberán observar las normas éticas que regulan la profesión;

g) En el TÍTULO II se desarrolla en el proyecto el Código de Ética Profesional del Economista, estableciéndose unos tipos abiertos ético-disciplinarios indicando los deberes, las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que deben observar los Economistas en sus actividades, se ordena el régimen sancionatorio de acuerdo con la gravedad de las conductas cometidas;

h) Finalmente, en el Capítulo III del TÍTULO II se describe un procedimiento disciplinario, que garantiza los derechos de contradicción y defensa de los Economistas investigados y se establecen etapas procesales precisas para adelantar los juicios de responsabilidad profesional garantizando el debido proceso.

Con las consideraciones expuestas, solicito respetuosamente se trámite el proyecto de reforma a la Ley 37 de 1990, que estoy proponiendo.



SECCIÓN DE LEYES  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes

Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2019

Señor Presidente:

Con el fin de repartir el Proyecto de ley número 173 de 2019 Senado, *por la cual se reforma la Ley 37 de 1990, se adopta el Código de Ética Profesional del Economista y se dictan otras disposiciones*, me permito remitir a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaría General del Senado de la República por los honorables Senadores *Bérner León Zambrano Eraso, Eduardo Enrique Pulgar Daza, Efraín José*

*Cepeda Sarabia, Juan Felipe Lemos Uribe*. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,  
*Gregorio Eljach Pacheco.*

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Septiembre 3 de 2019

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la Comisión Sexta Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado en la *Gaceta del Congreso*.

Cúmplase.  
El Presidente del Honorable Senado de la República,

*Lidio Arturo García Turbay.*

El Secretario General del Honorable Senado de la República,

*Gregorio Eljach Pacheco.*  
\* \* \*

PROYECTO DE LEY NÚMERO 174 DE 2019  
SENADO

*por medio del cual se prohíben las carreras ilegales o clandestinas en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.*

*“Ley Antipiques”*

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Para el presente proyecto de ley entiéndase por carreras ilegales o clandestinas, a aquellas que se realizan dentro del territorio nacional, sin el permiso de autoridad competente, en la cual se reúnen un grupo de personas de manera voluntaria o por convocatoria de cualquier medio, para restringir la libre movilidad de vehículos en la vía pública y alterar la tranquilidad y el orden público.

Artículo 2°. Se prohíben las carreras ilegales o clandestinas de vehículos automotores en todo el territorio nacional, para efectos de la presente ley únicamente se permiten aquellas carreras autorizadas por las autoridades administrativas de cada departamento y que cumplan con todos los requisitos legales para garantizar la seguridad de los conductores y asistentes a las mismas.

Artículo 3°. Únicamente las alcaldías de cada municipio o departamento pueden autorizar la realización de carreras de vehículos automotores, para ello deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Autorización de la Secretaría de Tránsito departamental o municipal;

b) Autorización del Departamento de Policía que se encuentra a cargo de la jurisdicción del departamento o municipio;

c) Cumplir con todo lo establecido en el Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016, sobre las actividades que involucren aglomeraciones de público complejas;

d) Demás normas pertinentes sobre la realización y autorización de eventos públicos.

Artículo 4°. La realización de carreras de vehículos automotores, que se lleven a cabo en vías públicas, autorizadas por las alcaldías, únicamente se podrán llevar a cabo en horario de 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., hora colombiana, con el fin de garantizar buenas condiciones de visibilidad para los conductores y evitar accidentes que involucren o afecten la integridad física de los asistentes.

Artículo 5°. Se prohíbe que por cualquier medio se convoque o programe la realización de carreras ilegales o clandestinas en el territorio nacional, quien lo hiciere incurrirá en multa de trescientos (300) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Artículo 6°. Quien se encuentre conduciendo carreras ilegales o clandestinas incurrirá en multa por parte de la autoridad competente de seiscientos (600) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Artículo 7°. Quien se encuentre participando en calidad de asistente o animador en carreras ilegales o clandestinas incurrirá en multa por parte de la autoridad competente de cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Artículo 8°. Se llevará a cabo inmovilización del vehículo automotor hasta por treinta (30) días, por parte de la autoridad competente, a quien se encuentre conduciendo en carreras ilegales o clandestinas.

Artículo 9°. Adiciónese a la Ley 599 de 200, Código Penal Colombiano el artículo 353B, el cual quedará de la siguiente manera:

**Artículo 353B. Participación en carreras ilegales o clandestinas de Vehículos automotores. Quien conduzca en carreras clandestinas de vehículos automotores poniendo en riesgo la vida, salud o seguridad ciudadana, obstaculice de manera total o parcial la vía pública imposibilitando la circulación de vehículos públicos, particulares, colectivo o vehículo oficial, dañando o alterando la vía pública, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.**

**Parágrafo 1°. Quien por cualquier medio convoque, programe o participe en la realización de carreras ilegales o clandestinas incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.**

Artículo 10. Modifíquese el artículo 110 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará de la siguiente manera:

**Artículo 110. Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo.** Modificado por la Ley 1326 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: La pena prevista en el artículo anterior se aumentará:

1. Si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena.

2. Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la conducta, la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena.

3. Si al momento de cometer la conducta el agente no tiene licencia de conducción o le ha sido suspendida por autoridad de tránsito, la pena se aumentará de una sexta parte a la mitad.

4. Si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales, la pena se aumentará de una cuarta parte a tres cuartas partes.

5. Si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando niños o ancianos sin el cumplimiento de los requisitos legales, la pena se aumentará de una cuarta parte a tres cuartas partes.

6. Si al momento de cometer la conducta el agente estuviese conduciendo vehículo automotor bajo el grado de alcoholemia igual o superior al grado 1°, o bajo el efecto de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica, y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de las dos terceras partes al doble, en la pena principal y accesoria.

**7. Si al momento de cometer la conducta el agente se encuentra ejerciendo una carrera clandestina de vehículos automotores.**

Artículo 11. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 769 de 2002, “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 26. *Causales de suspensión o cancelación.*

La licencia de conducción se suspenderá:

1. Por disposición de las autoridades de tránsito, basada en la imposibilidad transitoria, física o mental para conducir, soportado en un certificado médico o en el examen de aptitud física, mental o de coordinación expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.

2. Por decisión judicial.

3. Por encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por la autoridad competente de conformidad con lo consagrado en el artículo 152 de este Código.

4. Por prestar servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo justifique, previa decisión en tal sentido de la autoridad respectiva.

**5. Por encontrarse conduciendo en carreras clandestinas o ilegales de vehículos automotores.**

La licencia de conducción se cancelará:

1. Por disposición de las autoridades de tránsito basada en la imposibilidad permanente física o mental para conducir, soportada en un certificado médico o en el examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.

2. Por decisión judicial.

3. Por muerte del titular. La Registraduría Nacional del Estado Civil está obligada a reportar a los sistemas creados por los artículos 8° y 10 del presente ordenamiento, el fallecimiento del titular.

4. Reincidencia al encontrarse conduciendo en cualquier grado de estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por autoridad competente, en concordancia con el artículo 152 de este Código.

5. Por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa.

6. Por hacer uso de la licencia de conducción estando suspendida.

7. Por obtener por medios fraudulentos la expedición de una licencia de conducción, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan.

**8. Por reincidencia al encontrarse conduciendo en carreras clandestinas o vehículos automotores.**

**9. Por encontrarse conduciendo en carreras clandestinas de vehículos automotores bajo efectos de sustancias alucinógenas o bebidas embriagantes.**

Parágrafo. La suspensión o cancelación de la Licencia de Conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la sanción por el periodo de la suspensión, o a partir de la cancelación de ella.

La resolución de la autoridad de tránsito que establezca la responsabilidad e imponga la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, deberá contener la prohibición expresa al infractor de conducir vehículos automotores durante el tiempo que se le suspenda o cancele la licencia.

La notificación de la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, se realizará de conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

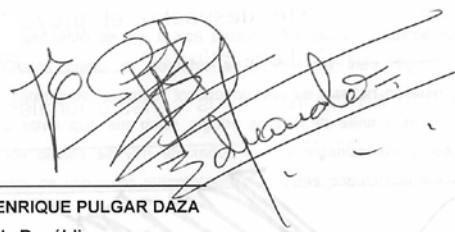
Una vez se encuentre en firme la resolución de la autoridad de tránsito mediante la cual cancela la licencia de conducción, por las causales previstas en

los numerales 6 y 7 de este artículo, se compulsarán copias de la actuación administrativa a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.

Transcurridos veinticinco (25) años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de conducción.

Artículo 12. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,

  
 EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA  
 Senador de la República

**I. Objeto del proyecto de ley**

El presente proyecto de ley tiene por objeto prohibir las carreras clandestinas de vehículos automotores en todo el territorio nacional, establecer cuáles son las entidades autorizadas para permitir y organizar carreras de vehículos automotores, modificar artículos del Código Penal, modificar el Código Nacional de Tránsito y se dictan otras disposiciones.

**II. Exposición de Motivos**

El presente proyecto de ley, busca proteger los bienes jurídicos de todos los colombianos, tales como el derecho a la vida, la vida digna, derecho a transportarse libremente, proteger los daños que se puedan ocasionar en la vía pública, entre otros que sin duda alguna afectan la sana convivencia de los ciudadanos, los cuales se ven afectados por la organización y realización de carreras ilegales de vehículos automotores conocidas popularmente como piques de carreras.

Los piques ilegales se han convertido en un problema de movilidad, seguridad y convivencia que ha venido aumentando en todo el país, principalmente en las grandes ciudades, las autoridades policiales y alcaldías municipales, departamentales, locales, etc., se han visto imposibilitados a tomar medidas efectivas, por la falta de regulación de las carreras ilegales, por tal motivo, resulta indispensable en aras de proteger la vida, seguridad y sana convivencia de los ciudadanos prohibir en todo el territorio nacional los piques ilegales.

Este proyecto de ley presenta varias medidas adoptadas las cuales se consideran necesarias en todos los aspectos, para cumplir con la finalidad de eliminar en el territorio nacional los piques de vehículos automotores, las cuales incluyen sanciones penales ante lo cual se hace precisión a lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 476-97, respecto a la regulación al ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos, refiriéndose de la siguiente manera: “La conservación del orden público en todo el territorio nacional implica la



*adopción, por parte de las autoridades, de medidas que regulen el ejercicio de los derechos y libertades de los gobernados. Su aplicación debe extenderse hasta donde el mantenimiento del bienestar general lo haga necesario, con observancia de las condiciones mínimas de respeto a la dignidad humana y a los demás derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.”<sup>1</sup>*

Por lo anterior cabe resaltar que las carreras ilegales son actualmente una de las modalidades en las cuales se está afectando la conservación del orden público, según denuncias ciudadanas presentadas ante medios de prensa, la alteración al orden público en las carreras ilegales se han visto acompañadas de drogadicción, alcoholismo, prostitución, porte ilegal de armas, vandalismo y hurtos, disparos de armas de fuego, que han obligado a la ciudadanía que en el momento en los cuales se realicen este tipo de piques ilegales, lleven a la ciudadanía a esconderse y no poder salir a la calle ante el temor de ser víctimas de ataques por parte de los participantes de este tipo de actividades.

De igual forma ocurre con los conductores de servicio público y de transporte particular, ya que en los momentos en los cuales se ha restringido su derecho a movilizarse en sus vehículos por la vía pública, porque quienes van a realizar las carreras ilegales, cierran las vías, atacan los vehículos, rompiendo vidrios e incluso agrediendo a los conductores y pasajeros.

Con lo anteriormente expuesto se evidencia notablemente la necesidad de reglamentar este tipo de prácticas, ya que este no es solo un llamado de la ciudadanía sino también de las autoridades policiales, departamentales y municipales.

El proyecto de igual manera se propone incluir una nueva circunstancia de agravación punitiva para el homicidio culposo, a quien se encuentre ejerciendo una carrera clandestina de vehículos automotores, hecho bastante significativo, ya que en Colombia se han venido incrementando las personas fallecidas por causa de los piques ilegales, lo cual se debe a hechos a la irresponsabilidad de quienes participan en dichas carreras, poniendo en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos.

#### **Consecuencias que se evidencian en la práctica de carreras ilegales o clandestinas**

- Alteración del orden público.
- Cierre ilegal de vías.
- Accidentes de tránsito.
- Consumo de sustancias alucinógenas.
- Aumento de delincuencia.
- Aumento de vandalismo.
- Se incrementa el riesgo de poner en riesgo la vida de los ciudadanos.
- Bloqueo de la movilidad de automóviles.

- Daños en la propiedad privada.
- Prostitución.
- Porte ilegal de armas.

En nota de prensa publicada en la página de la Alcaldía de Bogotá, el día viernes 15 de marzo del 2019, informa que en operativo realizado por la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito, se inmovilizaron 65 vehículos, se impusieron 115 comparendos y se abandonaron 20 vehículos<sup>2</sup>, por lo anterior podemos tener en cuenta problemática social que tienen las carreras ilegales que ocurren en todo el territorio nacional, principalmente en las grandes ciudades.

Las alcaldías de las grandes ciudades han llevado a cabo medidas para prohibir las carreras clandestinas, sin embargo, estas no han sido efectivas, se espera que por medio del presente proyecto de ley se disminuya en gran medida la práctica de este tipo de actividades.

#### **Consecuencias que se evidencian en la práctica de carreras ilegales o clandestinas**

- Alteración del orden público.
- Cierre ilegal de vías.
- Accidentes de tránsito.
- Consumo de sustancias alucinógenas.
- Aumento de delincuencia.
- Aumento de vandalismo.
- Se incrementa el riesgo de poner en riesgo la vida de los ciudadanos.
- Bloqueo de la movilidad de automóviles.
- Daños en la propiedad privada.
- Prostitución.
- Porte ilegal de armas.

Por todo lo anteriormente expuesto se evidencia la necesidad de dar trámite a este proyecto de ley, el cual va a brindar más seguridad, para los colombianos, podrán vivir en entornos mucho más seguros, donde no se vea afectado el orden público, se respete la propiedad privada, el cuidado de las calles, protección de la vida de los ciudadanos.

Atentamente,



EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA  
Senador de la República

<sup>1</sup> Sentencia SU-476/97, M. P. Doctor Vladimiro Naranjo Mesa, Corte Constitucional.

<sup>2</sup> Disponible en: [http://www.movilidadbogota.gov.co/web/Noticia/en\\_efectivo\\_operativo\\_a\\_piques\\_ilegales\\_se\\_inmovilizaron\\_65\\_veh%C3%ADculos\\_y\\_se\\_impusieron\\_115](http://www.movilidadbogota.gov.co/web/Noticia/en_efectivo_operativo_a_piques_ilegales_se_inmovilizaron_65_veh%C3%ADculos_y_se_impusieron_115)



SECCIÓN DE LEYES  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes

Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2019

Señor Presidente:

Con el fin de repartir el Proyecto de ley número 174 de 2019 Senado, *por medio del cual se prohíben las carreras ilegales o clandestinas en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones*, me permito remitir a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaría General del Senado de la República por el honorable Senador *Eduardo Enrique Pulgar Daza*. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,

*Gregorio Eljach Pacheco.*

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Septiembre 3 de 2019

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la Comisión Primera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado en la *Gaceta del Congreso*.

Cumplase.

El Presidente del honorable Senado de la República,

*Lidio Arturo García Turbay.*

El Secretario General del honorable Senado de la República,

*Gregorio Eljach Pacheco.*

\* \* \*

PROYECTO DE LEY NÚMERO 175 DE 2019  
SENADO

*por medio de la cual se modifica la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes y se dictan otras disposiciones.*

El Congreso de la República de Colombia,  
DECRETA:

Artículo 1°. *Objeto.* La creación de la Comisión Legal para la Defensa de los niños, niñas y adolescentes tiene por objeto vigilar, proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes del país, a través del control político, vigilancia, promoción y prevención de sus derechos.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 55 de la Ley 5ª de 1992, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 55. *Integración, denominación y funcionamiento.* Además de las Comisiones Legales señaladas para cada una de las Cámaras con competencias diferentes a estas, corresponderá integrar aplicando el sistema del cociente electoral y para el periodo constitucional la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, la Comisión de Acreditación Documental, la Comisión para la Equidad de la Mujer, la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana y la Comisión Legal para la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Artículo 3°. Adiciónese a la Sección 2ª del Capítulo IV, de la Ley 5ª de 1992, el siguiente artículo:

Artículo 61 I. *Comisión Legal para la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Congreso de la República.* Esta Comisión tiene por objeto vigilar, proteger y salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, a través del control político y la promoción y prevención de los mismos.

Artículo 4°. *Composición e Integración.* Adiciónese a la Sección 2ª del Capítulo IV, de la Ley 5ª de 1992, el siguiente artículo:

Artículo 61 J. *Composición e integración.* La Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes del Congreso de la República, estará conformada por 10 Senadores de la República y 10 Representantes a la Cámara.

Parágrafo 1°. Los congresistas que deseen hacer parte de la Comisión Legal para la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, podrán postularse de manera voluntaria, los integrantes serán elegidos al inicio de cada cuatrienio legislativo.

Parágrafo 2°. Al inicio de cada legislatura, se conformará la mesa directiva de la Comisión elegidos entre los integrantes de la misma.

Parágrafo 3°. Los integrantes de la Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes del Congreso de la República, sesionarán una vez al mes, con el fin de tratar temas de vital importancia sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 5°. *Funciones.* Adiciónese a la Sección 2ª del Capítulo IV, de la Ley 5ª de 1992, el siguiente artículo:

Artículo 61 K.-*Funciones.* La Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes del Congreso de la República tendrá las siguientes funciones:

1. La defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de todo el territorio nacional.
2. La vigilancia y control sobre toda autoridad encargada de velar por el respeto de los niños, niñas y adolescentes del país.
3. Trabajar coordinadamente con las entidades de orden nacional y/o territorial, Organizaciones No Gubernamentales nacionales y/o extranjeras, entidades del sector privado debidamente legalizadas, para la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
4. Llevar a cabo promoción y difusión a las entidades de orden nacional y/o territorial, Organizaciones No Gubernamentales nacionales y/o extranjeras y a la ciudadanía sobre la defensa y respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
5. Celebración de audiencias con la comunidad, en donde se traten temas relacionados con la defensa y respeto de los niños, niñas y adolescentes, en las audiencias podrán participar diferentes entidades de orden nacional y/o territorial, Organizaciones No Gubernamentales nacionales y/o extranjeras, entidades del sector privado debidamente legalizadas y la ciudadanía en general.
6. Realizar el respectivo trámite de las peticiones allegadas por los ciudadanos a las entidades competentes sobre casos de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como brindar seguimiento a los mismos.

7. Llevar a cabo por lo menos dos veces durante cada año legislativo, audiencias públicas en colegios que se encuentren ubicados en sectores de escasos recursos, donde los estudiantes podrán participar activamente.

En las audiencias la Comisión informará a los estudiantes temas relacionados con la protección de sus derechos fundamentales.

Parágrafo 1°. En las audiencias los estudiantes podrán presentar peticiones o informar hechos de vulneración de sus derechos, la Comisión deberá llevar a cabo el respectivo trámite ante las entidades pertinentes y brindar seguimiento a las mismas.

8. Presentar informes semestrales sobre el avance de las actividades llevadas a cabo por la Comisión en defensa de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 6°. *De los servicios administrativos y técnicos del Senado.* Modifíquese el artículo 369 de la Ley 5ª de 1992, adicionando al numeral 2.

Secretaría General, un subnumeral 2.6.15, el cual quedará de la siguiente manera:

2.6.15. Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Cantidad	Cargo	Grado
1	Coordinador Comisión	12
1	Asesor I	08
1	Secretaria Ejecutiva	05
1	Transcriptor	04

Artículo 7°. *De los servicios administrativos y técnicos de la Cámara de Representantes.* Modifíquese el artículo 383 de la Ley 5ª de 1992, adicionando al numeral 3. *Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes*, un subnumeral 3.15, el cual quedará de la siguiente manera:

3.15 Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Cantidad	Cargo	Grado
1	Profesional Universitario	06
1	Secretaria Ejecutiva	05
1	Transcriptor	04

Artículo 8°. *Pasantes, practicantes y/o judicantes.* La Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, podrá contar con el apoyo de pasantes, practicantes y/o judicantes, según los convenios que existan entre el Congreso de la República y las entidades educativas.

Artículo 9°. *Costo Fiscal.* Las Mesas Directivas de Senado y Cámara incluirán en el presupuesto Anual de Gastos del Congreso de la República, que hace parte de la Ley de Presupuesto General de la Nación para cada vigencia fiscal, las partidas correspondientes al pago de la planta de personal conforme con lo estipulado en la presente ley.

Los gastos generales necesarios para la implementación y funcionamiento de la Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes serán asumidos con cargo a las disponibilidades presupuestales que para cada vigencia se le asigne a la respectiva corporación.

Artículo 10. *Vigencia.* La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

Atentamente,



EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA  
Senador de la República  
Autor

PROYECTO DE LEY NO. \_\_\_\_\_

por medio de la cual se modifica la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes y se dictan otras disposiciones.



I. Objeto y contenido del proyecto de ley

El presente proyecto de ley tiene como objeto crear la Comisión Legal para la Defensa de los niños, niñas y adolescentes, para que el Congreso de la República, brinde a través de una labor legislativa, la efectiva promoción, respeto, defensa, control y vigilancia de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

II. Exposición de motivos

La problemática evidente que existe en Colombia sobre la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ha estado creciendo de manera alarmante, de allí la necesidad de que el Congreso de la República, se vea en la obligación de crear la Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, con la cual se busca que a través de esta célula legislativa se logre una significativa reducción de la vulneración de sus derechos, a través de su promoción, prevención, vigilancia y control político.

De igual manera la Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, podrá trabajar con otras entidades de orden gubernamental nacionales y/o territoriales, Organizaciones No Gubernamentales nacionales y/o extranjeras, entidades del sector privado debidamente legalizadas, con el fin de brindar una efectiva vigilancia sobre el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El presente proyecto de ley permite un gran acercamiento del Congreso de la República y la ciudadanía, al estipular como una de las funciones de la Comisión la celebración de audiencias públicas en donde la ciudadanía podrá participar activamente.

De igual manera como gran novedad, se destaca que las audiencias públicas también se lleven a cabo en los centros escolares, para informar a los niños, niñas y adolescentes sobre la protección de sus derechos y que así puedan tener conocimiento de qué tipo de acciones deben de llevar a cabo para el efectivo respeto y cumplimiento de los mismos haciendo seguimiento a casos en los cuales los estudiantes informen que se han vulnerado sus derechos, además de brindarles participación activa dentro de las audiencias.

Este proyecto de ley además de ser de gran importancia para la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia cumple con lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ratificada por Colombia donde se insta a los estados partes llevar a cabo todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Cumpliendo así el Congreso de la República con esta obligación estatal.

La creación de la Comisión legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, responde a

una necesidad del pueblo colombiano que ve cómo sus jóvenes son víctimas de toda clase de abusos en el entorno familiar, educativo, social y en redes sociales, afectando con esto su libre desarrollo de la personalidad, según lo informa la Organización Mundial de la Salud los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales físicos y mentales tales como: actos de violencia (como víctimas o perpetradores); depresión; consumo de tabaco; obesidad; comportamientos sexuales de alto riesgo; embarazos no deseados; consumo indebido de alcohol y drogas.<sup>1</sup>

Según la revista Forensis 2016, publicada por el Instituto Colombiano de Medicina Legal durante el 2016 la violencia con los niños, niñas y adolescentes fue más frecuente en menores de 10 a 14 años de edad (33,33 %); sin embargo, la tasa por cien mil habitantes identificó como grupo de mayor riesgo los adolescentes entre 15 y 17 años de edad (97,99)<sup>2</sup>.

VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA, 2016

Tabla 1. Violencia contra niños, niñas y adolescentes según grupo de edad y sexo de la víctima. Colombia, 2016

Grupo de edad	Hombre			Mujer			Total		
	Casos	%	Tasa x 100.000 hab.	Casos	%	Tasa x 100.000 hab.	Casos	%	Tasa x 100.000 hab.
(00 a 04)	876	18,23	39,49	747	14,16	35,29	1.623	16,10	37,44
(05 a 09)	1.405	29,23	64,45	1.159	21,97	55,64	2.564	25,43	60,14
(10 a 14)	1.521	31,65	69,78	1.839	34,86	88,14	3.360	33,33	78,76
(15 a 17)	1.004	20,89	76,05	1.531	29,02	120,85	2.535	25,14	97,99
Total	4.806	100	60,85	5.276	100	69,85	10.082	100	65,25

Fuente: Revista Forensis 2016 Datos para la Vida, Disponible en <http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/4023454/Forensis+2016+-+Datos+para+la+Vida.pdf/af636ef3-0e84-46d4-bc1b-a5ec71ac9fc1>

Sorprendente es el dato que presenta el Instituto Nacional de Medicina Legal que muestra que los agresores de niños, niñas y adolescentes en Colombia utilizan diferentes objetos o métodos para agredir al menor de edad los cuales incluyen armas de fuego, armas cortopunzantes, entre otros los cuales podrían llegar a generar en el menor un daño mucho mayor a su integridad física.

<sup>1</sup> Página web Organización Mundial de la Salud (OMS), Centro de prensa, septiembre de 2016. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/>

<sup>2</sup> RevistaForensis2016Datospara la Vida, Instituto Colombiano de Medicina Legal, Comportamiento de la Violencia Intrafamiliar Colombia, 2016. Disponible en: <http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/4023454/Forensis+2016+-+Datos+para+la+Vida.pdf/af636ef3-0e84-46d4-bc1b-a5ec71ac9fc1>

VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, SEGÚN CAUSA DE LA LESIÓN Y SEXO DE LA VÍCTIMA. COLOMBIA, 2016

Mecanismo causal de la lesión	Hombre		Mujer		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Contundente	2.281	68,05	2.599	69,77	4.880	68,96
Mecanismo múltiple	520	15,51	565	15,17	1.085	15,33
Cortocortundente	216	6,44	200	5,37	416	5,88
Abrasivo	169	5,04	212	5,69	381	5,38
Cortante	62	1,85	66	1,77	128	1,81
Térmico	45	1,34	36	0,97	81	1,14
Cortopunzante	47	1,40	29	0,78	76	1,07
Punzante	3	0,09	5	0,13	8	0,11
Agentes y mecanismos biológicos	3	0,09	3	0,08	6	0,08
Biodinámico	1	0,03	4	0,11	5	0,07
Tóxico	2	0,06	2	0,05	4	0,06
Generadores de asfixia	1	0,03	2	0,05	3	0,04
Eléctrico	1	0,03	1	0,03	2	0,03
Proyectil de arma de fuego	1	0,03	1	0,03	2	0,03
Total	3.352	100	3.725	100	7.077	100

Fuente: Revista Forensis 2016 Datos para la Vida, Disponible en <http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/4023454/Forensis+2016+-+Datos+para+la+Vida.pdf/af636ef3-0e84-46d4-bc1b-a5ec71ac9fc1>

La pornografía infantil es otro de los medios a través del cual se violan los derechos de los niños, niñas y adolescentes con Colombia, hasta llegar al punto de obligar a los menores a vender su cuerpo explotándolos de manera cruel e inhumana bajo amenazas y efectos de sustancias alucinógenas, las autoridades han puesto especial atención a este fenómeno, pero sin embargo se sigue con la vulneración de estos derechos.

El Bullying o acoso cibernético, el cual está en aumento y ha provocado una cantidad de afectaciones en el comportamiento y sano crecimiento de los jóvenes, logrando que los niños, niñas y adolescentes lleguen hasta el punto de llevar a cabo actitudes que no les gustan, únicamente para encajar dentro de determinado grupo social o simplemente para no seguir siendo víctimas de burlas, esta es una situación que no solo ha afectado a los jóvenes víctimas del bullying, sino que también afecta a la familia y a las personas que se encuentran a su alrededor.

El acoso escolar, provoca dos efectos dañinos para la formación en el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, ya que convierte al menor acosado en víctima desanimándolo para seguir con sus estudios y no sentirse bien en el entorno educativo, llegando incluso en determinados casos a la deserción escolar; al menor acosador lo convierte este tipo de actitudes en un ser humano que disfruta de la vulneración de derechos de sus compañeros, generando comportamientos de irrespeto hacia las personas que los rodeen llevando incluso estos comportamientos a la adultez y generar más violencia a futuro.

Los mencionados anteriormente son solo algunos de los medios por los cuales se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero a nivel nacional existen en Colombia otras formas de vulneración de derechos, tales como el derecho al

acceso a la salud, acceso a la educación, derecho a crecer en un ambiente sano, entre otros, los cuales con la conformación de esta Comisión Legal serán de especial protección a través de la vigilancia y control político que lleve a cabo el Congreso de la República.

III. Legislación Colombiana

• Constitución Política de Colombia:

“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” (Negrillas por fuera del texto original).

• Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006:

- Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.

Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y, en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. (Negrillas por fuera del texto original).

- Artículo 41. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá:

1. **Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.**

2. **Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a través del diseño** y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia.

4. **Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados.**

5. **Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social.**

6. **Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas, y garantizar la reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos vulnerados.**

7. **Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales que presenten los niños, las niñas y los adolescentes, su familia o la sociedad para la protección de sus derechos.**

8. **Promover en todos los estamentos de la sociedad, el respeto a la integridad física, psíquica e intelectual y el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la forma de hacerlos efectivos.**

9. **Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, la convivencia democrática y los valores humanos y en la solución pacífica de los conflictos.**

10. **Apoyar a las familias para que estas puedan asegurarle a sus hijos e hijas desde su gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico e intelectual, por lo menos hasta que cumplan los 18 años de edad.**

16. **Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes formas de violencia y todo tipo de accidentes que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida de los niños, las niñas y los adolescentes.**

26. **Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el maltrato infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos.**

27. **Prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, vulneración o emergencia.**

28. **Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual.**

29. **Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares,**

operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares.

33. **Promover estrategias de comunicación educativa para transformar los patrones culturales que toleran el trabajo infantil y resaltar el valor de la educación como proceso fundamental para el desarrollo de la niñez.**

34. **Asegurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las actuaciones que sean de su interés o que los involucren cualquiera sea su naturaleza, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica y garantizar el cumplimiento de los términos señalados en la ley o en los reglamentos frente al debido proceso. Procurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal.**

- **Artículo 51.** *Obligación del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de familia o, en su defecto, los inspectores de policía o las personerías municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad.* Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales.

#### IV. Legislación Internacional

- Convención sobre los Derechos del Niño.
- Declaración de los Derechos del Niño.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos.

#### V. Impacto fiscal

El presente proyecto de ley genera un impacto fiscal, en el gasto presupuestal del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, para el pago de personal de planta y gastos de funcionamiento de la Comisión.

Corresponderá al Senado y la Cámara de Representantes, incluir los gastos de personal y funcionamiento en el presupuesto anual del Congreso de la República, que hace parte de la Ley de Presupuesto General de la Nación para cada vigencia fiscal.

#### VI. PROPOSICIÓN

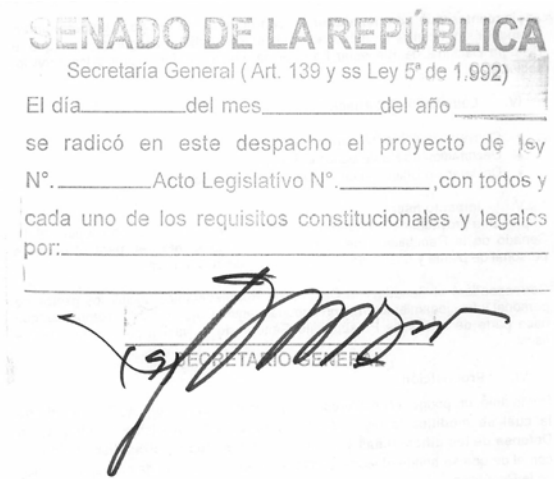
Por lo anterior, pongo a consideración el presente proyecto de ley, *por medio de la cual se modifica la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes y se*



*dictan otras disposiciones, con el fin de que se brinde el respectivo trámite legislativo y pueda convertirse en ley de la República.*

Atentamente,

  
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA  
Senador de la República  
Autor



SECCIÓN DE LEYES  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA GENERAL  
Tramitación Leyes

Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2019

Señor Presidente:

Con el fin de repartir el Proyecto de ley número 175 de 2019 Senado, *por medio de la cual se modifica la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes y se dictan otras disposiciones*, me permito remitir a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaría General del Senado de la República por el honorable Senador *Eduardo Enrique Pulgar Daza*. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,

*Gregorio Eljach Pacheco.*

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Septiembre 3 de 2019

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la Comisión Primera Constitucional y envíese

copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado en la **Gaceta del Congreso**.

Cúmplase.

El Presidente del honorable Senado de la República,

*Lidio Arturo García Turbay.*

El Secretario General del honorable Senado de la República,

*Gregorio Eljach Pacheco.*

\*\*\*

PROYECTO DE LEY NÚMERO 176 DE 2019  
SENADO

*por medio del cual se modifican los artículos 365 y 366 de la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano, se reglamenta el porte de armas blancas y se dictan otras disposiciones.*

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifique el artículo 365 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará de la siguiente manera:

**Artículo 365. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.**

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de doce (12) a dieciséis (16) años.

En la misma pena incurrirá cuando se trate de armas de fuego de fabricación hechiza o artesanal, salvo las escopetas de fisto en zonas rurales.

La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se cometa en las siguientes circunstancias:

1. Utilizando medios motorizados.
2. Cuando el arma provenga de un delito.
3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades.
4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten.
5. Obrar en coparticipación criminal.
6. Cuando las armas o municiones hayan sido modificadas en sus características de fabricación u origen, que aumenten su letalidad.
7. Cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo de delincuencia organizado.
8. Cuando se porte o tenencia de armas de fuego en lugares de transporte público o de alta afluencia de personas.

**Parágrafo 1°. Circunstancia de agravación.**  
La pena será de dieciséis (16) a veinte (20) años de prisión, en caso de reincidencia.

Artículo 2°. Adiciónese a la Ley 599 de 2000 un nuevo artículo, el cual quedará de la siguiente manera:

**Artículo 365 A. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas blancas.**

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, distribuya, venda, suministre y/o porte armas blancas, incurrirá en prisión de cuatro a ocho (8) años, salvo que las mismas sean usadas en actividades domésticas, laborales y/o educativas.

**Parágrafo 1°.** Para el presente artículo entiéndase por arma blanca a los cuchillos, navajas, machetes, hachas, garfios, bisturí, hojillas de afeitar, tijeras, aquellas que haya establecido la ley como tal y/o cualquier otro elemento que haya sido alterado en su forma, sacándole filo para utilizarlo como objeto cortopunzante.

**Parágrafo 2°. Circunstancia de agravación.** La pena será de ocho (8) a doce (12) años de prisión, en caso de reincidencia.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 366 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará de la siguiente manera:

**Artículo 366. Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.**

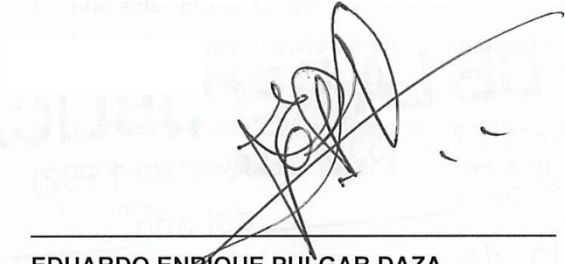
El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre, porte o tenga en un lugar armas o sus partes esenciales, accesorios esenciales, municiones de uso privado de las Fuerzas Armadas o explosivos, incurrirá en prisión de quince (15) a veinte (20) años.

La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando concurren las circunstancias determinadas en el inciso 3° del artículo anterior.

**Parágrafo 1°. Circunstancia de agravación.** La pena será de veinte (20) a veinticuatro (24) años de prisión, en caso de reincidencia.

Artículo 4°. Vigencia y derogatoria. La presente ley empieza regir a partir de la fecha de publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,

  
**EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA**  
Senador de la República  
Autor

**PROYECTO DE LEY NO. \_\_**

*por medio del cual se modifican los artículos 365 y 366 de la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano, se reglamenta el porte de armas blancas y se dictan otras disposiciones.*

**1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**1.1. Objeto.**

El presente proyecto de ley tiene como objeto modificar los artículos 365 “*Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones*” y 366 “*Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.*” de la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano, con el fin de sancionar y prevenir los daños que se puedan llegar a cometer a los bienes jurídicos tutelados de los ciudadanos.

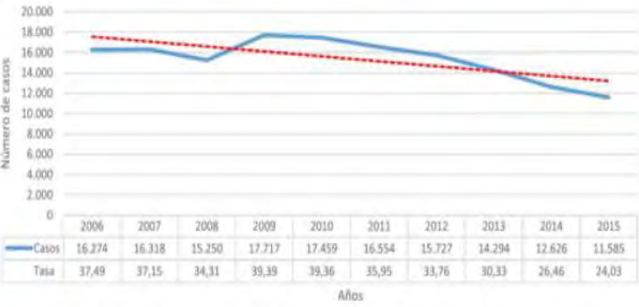
De igual manera se crea el artículo 365 A, el cual establece la sanción para la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas blancas.

**1.2 Introducción.**

**1.2.1 Armas de fuego**

El marco de prevención que debe ejercer el Estado colombiano busca siempre evitar que se llegue a ocasionar un daño jurídico hacia los ciudadanos o al mismo Estado, motivo por el cual se adoptan medidas concernientes a evitar tales daños. En Colombia, los altos índices de homicidio han sido una prevalente en materia criminal; desde el inicio del cese al fuego llevado a cabo en los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC, dichos índices han disminuido notablemente, pero todavía se evidencia un alto y preocupante número homicidios, los cuales según Medicina Legal al año 2015 son de 11.585 de casos, como se presenta en la siguiente gráfica:

**HOMICIDIOS, CASOS Y TASAS POR 100.000 MIL HABITANTES. COLOMBIA, 2006 –**



FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/ Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia/Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC)/Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas. Tasas calculadoras con base en la proyección poblacional DANE 2005-2020.

Imagen tomada de la Revista Científica Forense, *Forensis* 2015 Datos para la Vida, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de

Referencia Nacional sobre Violencia, disponible en: <http://www.medicinalegal.gov.co/forensis>.

Nos informa en la Revista Científica *Forensis*, del Instituto Nacional de Medicina Legal, que uno de los principales momentos en los cuales ocurren homicidios es en actividades relacionadas con la asistencia a eventos culturales, de entretenimiento y/o deportivos, con un total de 1.285 casos, entre los cuales se destacan las riñas como uno de los principales factores.

Pero lo que más se quiere resaltar con estas cifras es que los motivos por los cuales se han llevado a cabo estos homicidios son en su mayoría por el uso de armas de fuego como principal instrumento utilizado por el sujeto activo para llevar a cabo la conducta.

Ante el incremento de delincuencia común, riñas, lucha por territorios expendio de drogas, ajustes de cuentas, etc., se ha generado una nueva forma de cómo se llevan a cabo este tipo de actividades delictivas y quienes las cometen en su gran mayoría utilizan las armas de fuego como instrumento principal, ya sea para asesinar, lesionar o atemorizar, el Instituto Nacional de Medicina Legal informa que en el 2015 *el proyectil de arma de fuego continúa siendo el mecanismo más utilizado para cometer homicidios (71,76%). Aunque ligeramente menor que el año anterior (72,68%)*<sup>1</sup>.

Estas cifras nos indican que aunque las tasas de homicidios han disminuido notablemente, el no uso de armas de fuego ha tenido una reducción mínima, ante lo cual se deben aumentar las penas del uso de arma de fuego en el país, esto con el fin de prevenir y disminuir el uso y porte de estas por parte de la ciudadanía, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades, aunque como se informó este delito ha tendido a disminuir, no se ha logrado una reducción notable.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-038 de 1995 se ha referido al tema diciendo lo siguiente “*La penalización de la fabricación, comercio y porte de armas sin permiso de autoridad competente, corresponde a una política de Estado adecuada para proteger la vida de los ciudadanos, la cual encuentra perfecto sustento constitucional. En el caso colombiano, por las condiciones que atraviesa nuestra sociedad, el control a la tenencia de armas resulta indispensable para el sostenimiento de la*

*seguridad pública y la realización efectiva de los derechos de las personas*<sup>2</sup>.

Pero no solamente al aumentar la pena contra la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones ayudaría a la disminución de la tasa de homicidios, también se convertiría en una medida preventiva para disminuir el robo con armas de fuego, mantener el orden público y proteger el daño que se puede llegar a causar a un número indeterminado de personas, etc.

Es evidente que una persona que tenga bajo su tenencia un arma de fuego de manera ilegal es porque tiene la intención de cometer un delito o porque simplemente ya lo cometió, y es allí cuando el legislador debe entrar a penalizar este tipo de conductas y se utiliza el aumento de pena para advertir al ciudadano en qué tipo de sanción puede quedar inmerso por el solo hecho de portar de manera ilegal un arma de fuego, ya que con esta acción, el Estado estaría previniendo una cantidad de conductas que afectarían varios bienes jurídicos.

Lo expresa la Corte Constitucional en la Sentencia C-038 de 1995 donde dice “*esta penalización de diversas conductas asociadas con las armas de fuego se encuentra en el Código Penal, en el título de los “Delitos contra la seguridad pública”, en el capítulo sobre “delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones”. Es pues un tipo penal pluriofensivo, por cuanto la tipificación de la conducta busca defender varios bienes jurídicos, y por ende varios intereses, como la vida e integridad corporal de las personas, el patrimonio, y el orden público o seguridad pública.*”<sup>3</sup> (Negrillas fuera del texto original).

### 1.3. Avances legislativos para el aumento de penas sobre el porte armas de fuego.

En la Ley 599 de 2000 el Código Penal Colombiano este delito se encuentra tipificado en el artículo 365 de Título XII *Delitos contra la seguridad pública*, en el capítulo sobre *delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones*, y desde su creación ha experimentado las siguientes modificaciones, las cuales han sido principalmente modificando la pena sobre la cual se puede llegar a incurrir el sujeto activo de la conducta:

<sup>1</sup> Revista Científica Forense, *Forensis* 2015 Datos para la Vida, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, disponible en: <http://www.medicinalegal.gov.co/forensis>.

<sup>2</sup> Sentencia C-038 de 1995.

<sup>3</sup> Sentencia C-038 de 1995.



LEY 599 DE 2000		
TÍTULO XII		
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA		
CAPÍTULO SEGUNDO		
De los delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones		
Artículo 365. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.		
Estado: Derogado	Estado: Derogado	Estado: Vigente
Texto inicial Ley 599 de 2000	Modificado por la Ley 1142 de 2007	<b>Modificado por el artículo 19, Ley 1453 de 2011</b>
<p><i>Artículo 365. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.</i></p> <p>El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos, incurrirá en <u><b>prisión de uno (1) a cuatro (4) años.</b></u></p> <p>La pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se cometa en las siguientes circunstancias:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Utilizando medios motorizados.</li><li>2. Cuando el arma provenga de un delito.</li><li>3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades, y</li><li>4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten.</li></ol>	<p><i>Artículo 365. Fabricación, tráfico y porte de armas de Fuego o municiones.</i></p> <p>El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal y municiones, incurrirá en <u><b>prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.</b></u></p> <p>La pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se cometa en las siguientes circunstancias:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Utilizando medios motorizados.</li><li>2. Cuando el arma provenga de un delito.</li><li>3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades, y</li><li>4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten.</li></ol>	<p><i>Artículo 365. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.</i></p> <p>El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte <b>o tenga en un lugar armas</b> de fuego de defensa personal, <b>sus partes esenciales, accesorios esenciales</b> o municiones, incurrirá en <u><b>prisión de nueve (9) a doce (12) años.</b></u></p> <p><b>En la misma pena incurrirá cuando se trate de armas de fuego de fabricación hechiza o artesanal, salvo las escopetas de fisto en zonas rurales.</b></p> <p>La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se cometa en las siguientes circunstancias:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Utilizando medios motorizados.</li><li>2. Cuando el arma provenga de un delito.</li><li>3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades.</li><li>4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten.</li></ol> <p><b>5. Obrar en coparticipación criminal.</b></p> <p><b>6. Cuando las armas o municiones hayan sido modificadas en sus características de fabricación u origen, que aumenten su letalidad.</b></p> <p><b>7. Cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo de delincuencia organizado.</b></p>
Artículo 366. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.		
<p><i>Artículo 366. Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.</i></p> <p>El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre o porte armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, incurrirá en <u><b>prisión de tres (3) a diez (10) años.</b></u></p> <p>La pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará cuando concurren las circunstancias determinadas en el inciso 2° del artículo anterior.</p>	<p><i>Artículo 366. Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos.</i></p> <p>El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre o porte armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, o explosivos, incurrirá en <u><b>prisión de cinco (5) a quince (15) años.</b></u></p> <p>La pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará cuando concurren las circunstancias determinadas en el inciso 2° del artículo anterior.</p>	<p><i>Artículo 366. Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.</i></p> <p>El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, <b>transporte</b>, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre, porte <b>o tenga en un lugar armas o sus partes esenciales, accesorios esenciales</b>, municiones de uso privado de las Fuerzas Armadas o explosivos, incurrirá en <u><b>prisión de once (11) a quince (15) años.</b></u></p> <p>La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando concurren las circunstancias determinadas en el inciso 3° del artículo anterior.</p>

**\*Las negrillas indican las modificaciones que ha tenido el tipo penal y las negrillas subrayadas indican el aumento de pena al cual se ha visto sometido el mismo.**

**1.2.2 Armas blancas**

Si bien es cierto que las armas de fuego han sido las que mayormente han incrementado los índices de homicidio y violencia en el país, cabe destacar que las armas blancas se encuentran en aumento como un mecanismo para atentar contra la vida e integridad de los ciudadanos; además al no encontrarse penalizadas en su uso y porte, son más los ciudadanos que las portan a sabiendas de que no recibirán sanción penal, motivo por el cual se ha incrementado notablemente el uso de las armas blancas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la publicación de *Forensis* 2017, Datos para la Vida, presenta en la tabla 4, los homicidios cometidos según el mecanismo causal, de los cuales tomaremos los siguientes datos:

Mecanismo Causal	Total	
	Casos	Porcentaje
Proyectil de arma de fuego	8.112	71,66
Cortopunzante	2.174	19,18
Contundente	369	3,26
Cortocontundente	261	2,30
Generadores de asfixia	247	2,18
Cortante	56	0,49
Agente o mecanismo explosivo	43	0,38
Punzante	30	0,26
Tóxico	13	0,11
Térmico	12	0,11
Cáustico	1	0,01
Otros	6	0,05
Total	11.334	100

Fuente: Cifras tomadas de Tabla 4, El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la publicación de *Forensis* 2017, Datos para la Vida.

Por lo expuesto anteriormente se puede evidenciar en el mecanismos cortopunzante, cortocondundente, cortante, Punzante, se pueden catalogar como armas blancas, las cuales presentan una cifra de 2.521 casos.

De igual manera ante los contantes hechos de aumento en la vulneración a la vida e integridad de los ciudadanos, las grandes ciudades de Colombia en cabeza de sus alcaldes, han elevado una voz de alerta, a la cual el legislativo no puede hacer caso omiso, ya que el uso de este tipo de armas está generando un caos en la seguridad de los colombianos y se espera que con la creación de este nuevo artículo y las medidas adoptadas por las autoridades pertinentes para la ejecución del mismo, se disminuya en gran

medida los homicidios, hurtos, riñas y demás hechos que se puedan derivar del uso de armas blancas.

**2. ESTRUCTURA DL PROYECTO DE LEY**

El presente proyecto de ley consta de 4 artículos distribuidos así:

2.1. El artículo primero modifica el artículo 365 de la Ley 599 de 2000, incrementando la pena de prisión de doce (12) a dieciséis (16) años de la siguiente manera:

Artículo 365. *Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.* El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en **prisión de doce (12) a dieciséis (16) años.**

Y se agrega una circunstancia bajo la cual se duplica la conducta y quedará de la siguiente manera como numeral 8. **Cuando se porte o tenencia de armas de fuego en lugares de transporte público o de alta afluencia de personas.**

Y se adiciona un párrafo en caso de reincidencia de la conducta de la siguiente manera:

**Parágrafo 1°. En caso de reincidencia la pena será de dieciséis (16) a veinte (20) años de prisión.**

2.2. El artículo segundo crea un nuevo artículo, sobre la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas blancas contemplando una pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, la cual quedará de la siguiente manera:

**Artículo 365 A. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas blancas.**

**El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, distribuya, venda, suministre y/o porte armas blancas, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, salvo que las mismas sean usadas en actividades domésticas, laborales y/o educativas.**

Así mismo se contempla la adición de dos párrafos el 1° orientado a definir los tipos de armas blancas y el párrafo 2° establece el incremento de la pena en la reincidencia de la conducta.

**Parágrafo 1°. Para el presente artículo entiéndase por arma blanca a los cuchillos, navajas, machetes, hachas, garfios, bisturí, hojillas de afeitar, tijeras, aquellas que haya establecido la ley como tal y/o cualquier otro elemento que haya sido alterado en su forma sacándole filo para utilizarlo como objeto cortopunzante.**

**Parágrafo 2°. En caso de reincidencia incurrirá en prisión de ocho (8) a doce (12) años de prisión.**

2.3. El artículo tercero modifica el artículo 366 de la Ley 599 de 2000, incrementando la pena de

prisión de quince a veinte años de prisión la siguiente manera:

Artículo 366. *Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.*

El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre, porte o tenga en un lugar armas o sus partes esenciales, accesorios esenciales, municiones de uso privado de las Fuerzas Armadas o explosivos, incurrirá en **prisión de quince (15) a veinte (20) años.**

Y se adiciona un párrafo en caso de reincidencia de la conducta de la siguiente manera:

**Parágrafo 1°. En caso de reincidencia incurrirá en prisión de veinte (20) a veinticuatro (24) años de prisión.**

2.4. El artículo cuarto contiene la vigencia y derogatorias que tendrá el proyecto de ley.

**3 PROPOSICIÓN**


Por lo anterior, pongo a consideración el presente proyecto de ley, *por medio del cual se modifican los artículos 365 y 366 de la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano, se reglamenta el porte de armas blancas y se dictan otras disposiciones*, con el fin de que surta el trámite legislativo correspondiente y sea ley de la República.

Atentamente,



**EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA**  
Senador de la República  
Autor

**SENADO DE LA REPÚBLICA**  
Secretaría General ( Art. 139 y ss Ley 5ª de 1.992)  
El día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_  
se radicó en este despacho el proyecto de ley  
N°. \_\_\_\_\_ Acto Legislativo N°. \_\_\_\_\_, con todos y  
cada uno de los requisitos constitucionales y legales  
por: \_\_\_\_\_



**SECCIÓN DE LEYES**  
**SENADO DE LA REPÚBLICA**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
Tramitación Leyes  
Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2019

Señor Presidente:

Con el fin de repartir el Proyecto de ley número 176 de 2019 Senado, *por medio del cual se modifican los artículos 365 y 366 de la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano, se reglamenta el porte de armas blancas y se dictan otras disposiciones*, me permito remitir a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaría General del Senado de la República por el honorable Senador *Eduardo Enrique Pulgar Daza*. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión **Primera** Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,  
*Gregorio Eljach Pacheco.*

**PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA**

Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2019

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la Comisión **Primera** Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado en la *Gaceta del Congreso*.

Cúmplase.

El Presidente del Honorable Senado de la República,

*Lidio Arturo García Turbay.*

El Secretario General del Honorable Senado de la República,

*Gregorio Eljach Pacheco.*  
\* \* \*

**PROYECTO DE LEY NÚMERO 177 DE 2019  
SENADO**

**Congreso de Colombia**

*por el cual se establece el Día Nacional de la Coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, se declara monumento nacional y patrimonio histórico de la Nación la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y se dictan otras disposiciones.*

**El Congreso de Colombia**

**DECRETA:**

**Artículo 1°.** Establézcase el día 9 de julio de cada año, como el Día Nacional de la Coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

**Artículo 2°.** Declárase monumento nacional y patrimonio histórico de la nación la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ubicado en el municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá.

**Artículo 3°.** A partir de la promulgación de la presente ley, el día 9 de julio no será considerado día festivo; por lo tanto, corresponderá a los empleadores



por decisión propia otorgar descanso remunerado a sus empleados.

**Artículo 4°.** La presente ley rige a partir de su expedición.

Atentamente,



Eduardo Enrique Pulgar Daza  
Senador de República

### I. Estructura del proyecto.

El proyecto de ley cuenta con cuatro artículos distribuidos de la siguiente manera:

Artículo 1°, Establece el día 9 de julio de cada año, como el Día Nacional de la Coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Artículo 2°, Declárase monumento nacional y patrimonio histórico de la Nación la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Artículo 3°, establece que el día 9 de julio no será considerado día festivo, motivo por el cual, corresponderá a los empleadores por decisión propia otorgar descanso remunerado a sus empleados.

Artículo 4°. *Vigencia y derogatoria.*

### I. Objeto

Por medio del presente proyecto de ley se quiere de establecer el día 9 de julio de cada año, como el Día Nacional de la Coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, con ocasión del centenario celebrado el martes 9 de julio del año 2019, destacando la importancia cultural, artística y religiosa que tiene el lienzo de la Virgen de Chiquinquirá para los colombianos y la comunidad internacional, como un símbolo nacional e internacional, el cual se ha mantenido vigente desde hace 457 años.

### II. Justificación

El presente proyecto de ley busca establecer día 9 de julio de cada año, como el Día Nacional de la Coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ya que se considera este lienzo como un símbolo nacional e internacional, el cual genera gran atracción turística, siendo tal su protagonismo que el Municipio de Chiquinquirá, donde se encuentra el Cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, recibe el nombre popular de “Capital Religiosa de Colombia”.

De igual manera ha tenido gran representación en la vida histórica de Colombia como se expresa en la página Web Oficial del Museo de Santa Clara de la siguiente manera “el protagonismo de esta Virgen dentro de la vida nacional es tan grande que incluso figuras históricas de diferentes épocas se ampararon

en ella, así, Simón Bolívar le encomendó la campaña libertadora, Marco Fidel Suárez la nombró reina de Colombia y Gustavo Rojas Pinilla la condecoró con la Cruz de Boyacá”<sup>1</sup>.

De igual manera el 9 de julio de 1999, “la imagen fue llevada a Bogotá para presidir la oración por la paz. Allí le confieren la Orden del Congreso, en el grado de Gran Cruz Extraordinaria”<sup>2</sup>.

Así mismo, ha sido visitada por el Papa Juan Pablo II el 3 de julio de 1986 y por el Papa Francisco en el año 2007.

Se quiere destacar dentro del proyecto de ley que el Cuadro de la Virgen de Chiquinquirá no es únicamente uno de los más importantes símbolos dentro de la religión católica en Colombia, sino que también es importante símbolo artístico y cultural de gran importancia desde el siglo XVIII.

Lo que se quiere resaltar con este proyecto es la importancia cultural, artística y religiosa que ha tenido en los colombianos el lienzo de la Señora del Rosario de Chiquinquirá y, aunque dentro del calendario católico se celebra los días 9 de julio y 26 de diciembre, se quiere brindar un homenaje a tan importante obra, decretando un día nacional, por el significado que tuvo los cien años de Coronación de la Virgen de Chiquinquirá y por la rica historia cultural y ancestral, que ha representado en Colombia, América y muchos lugares del mundo.

Así mismo, el proyecto de ley busca declarar monumento nacional y patrimonio histórico la Nación la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ubicado en el municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá, la cual tiene gran afluencia de visitantes por tener el lienzo de la Virgen de Chiquinquirá, de igual manera se espera que con la declaración de monumento nacional y patrimonio histórico de la Basílica, se aumente el sector turístico del municipio de Chiquinquirá.

No siendo otro el motivo de la presente agradezco la atención prestada.

Atentamente,



Eduardo Enrique Pulgar Daza  
Senador de República

<sup>1</sup> Tomado de: Pagina Web Museo de Santa Clara disponible en: <http://www.museocolonial.gov.co/coleccion/piezas-del-mes/Paginas/Virgen-de-Chiquinquir%C3%A1-.aspx>

<sup>2</sup> Tomado de: Página Web nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, disponible en: <https://virgendechiquinquir.com/index.php/santuario/historia-del-santuario>

SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General (Art. 139 y ss Ley 5ª de 1.992)

El día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

se radicó en este despacho el proyecto de ley

Nº. \_\_\_\_\_ Acto Legislativo Nº. \_\_\_\_\_, con todos y

cada uno de los requisitos constitucionales y legales

por: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SECRETARIO GENERAL

SECCIÓN DE LEYES

SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARIA GENERAL

Tramitación Leyes

Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2019

Señor Presidente:

Con el fin de repartir el Proyecto de ley número 177 de 2019 Senado, *por el cual se establece el día nacional de la coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, se declara monumento nacional y patrimonio histórico la Nación la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y se dictan otras disposiciones*, me permito remitir a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaría General del Senado de la República por el honorable Senador *Eduardo Enrique Pulgar Daza*. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión **Segunda** Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,

*Gregorio Eljach Pacheco.*

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2019

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la Comisión **Segunda** Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado en la *Gaceta del Congreso*.

Cumplase.

El Presidente del Honorable Senado de la República,

*Lidio Arturo García Turbay.*

El Secretario General del Honorable Senado de la República,

*Gregorio Eljach Pacheco.*

PROYECTO DE LEY NÚMERO 178 DE 2019  
SENADO

*por medio de la cual se establece y se crea la Cátedra de Protección a la Juventud en todas las instituciones educativas del país.*

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

**Artículo 1°.** La presente ley tiene como objeto establecer y crear la Cátedra de Protección a la Juventud en todas las instituciones educativas del país, con el fin de que por medio de la educación que se otorgue a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de todo el país prevención y fortalecimiento, en acceso a la tecnología, consecuencias del consumo de sustancias alucinógenas, violencia intrafamiliar, trabajo infantil, *bullying* y demás problemáticas sociales que afecten sus derechos y su sano crecimiento físico y mental.

**Artículo 2°.** La presente ley aplicará en las instituciones educativas de todo el territorio nacional, en educación preescolar, educación básica, educación media y optativa en educación superior.

**Artículo 3°.** El Programa de la Cátedra en Protección a la Juventud, que impartirán los docentes asignados, deberá tener en cuenta el grado al cual se van a dirigir, con el fin de brindar la educación adecuada de acuerdo al crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes utilizando el lenguaje idóneo para cada grado.

**Artículo 4°.** La Cátedra de Protección a la Juventud también deberá ir orientada para la formación de los padres de familia, con el fin de que estén informados y tengan conocimiento sobre las acciones y controles que deben llevar a cabo en la educación y formación de sus hijos en el acceso a la tecnología, consecuencias del consumo de sustancias alucinógenas, violencia intrafamiliar y demás problemáticas sociales que afecten los derechos los niños, niñas y adolescentes, a través de los medios que el docente considere pertinentes y verificar que la información efectivamente haya llegado a los padres de familia.

**Artículo 5°.** Si, en desarrollo de la Cátedra de Protección a la Juventud, el docente llegare a evidenciar que alguno de los alumnos es víctima o victimario de una problemática que pueda llegar a afectar sus derechos fundamentales y los derechos de los demás, deberá implementar las acciones pertinentes para poner en conocimiento del Colegio el hecho evidenciado, con el fin de brindarle la ayuda pertinente; dependiendo de la gravedad del caso, la Institución Educativa deberá denunciar ante las autoridades correspondientes.

**Artículo 5°.** El Ministerio de Educación será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la presente ley e implementación de la Cátedra a la Juventud en todas las instituciones educativas del país.

**Artículo 6°.** El Gobierno nacional dispondrá de un plazo de seis (6) meses, para la reglamentación y aplicación de la presente ley.

**Artículo 7°.** La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,



---

EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA

Senador de la República

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Objeto del proyecto de ley

El presente proyecto de ley tiene como objeto establecer y crear la Cátedra de Protección a la Juventud en todas las instituciones educativas del país, con el fin de que por medio de la educación que se otorgue a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de todo el país protección y fortalecimiento, en acceso a la tecnología, consecuencias del consumo de sustancias alucinógenas, violencia intrafamiliar y demás problemáticas sociales que afecten sus derechos y su sano crecimiento físico y mental.

II. Justificación

Colombia está presentado actualmente una problemática en la cual se están viendo perjudicados principalmente los niños, niñas

jóvenes y adolescentes, relacionados con acceso a la tecnología, el consumo de sustancias alucinógenas, violencia intrafamiliar, entre otras, que han venido afectado el sano crecimiento y desarrollo de la juventud colombiana, generando problemas de comportamiento, afectaciones psicológicas, deserción escolar, vandalismos juvenil esto generando en los niños, niñas y adolescentes problemas no solo en su entorno personal y familiar, sino que también en toda la comunidad que los rodea.

Los niños, niñas y adolescentes están hoy en día expuestos, a varios a diversos factores que afectan su comportamiento y sano crecimiento y ante lo cual los padres de familia, no tienen en muchos casos es espacio para verificar el actuar de sus hijos y para aconsejarlos sobre las acciones que podrían tomar los jóvenes en caso de que les brinden sustancias alucinógenas, el uso de armas, el *bullying*, el acceso a la pornografía, entre otros, por tal motivo considera el legislador que no solamente es suficiente que los padres de familia verifiquen y aconsejen a sus hijos menores de edad, sino que también desde la cátedra se prevenga sobre qué tipo de actuaciones deben tomar los jóvenes en determinados casos que se les pueden presentar en la vida diaria y cuáles son las consecuencias de esas decisiones.

Presentaremos solamente algunas de las problemáticas que podrían presentar los niños, niñas y jóvenes, y veremos sus consecuencias por tal motivo vamos a presentar una de las más comunes y es el suicidio, los cuales se pueden ver relacionados según la problemática, en cifras del Ministerio de Salud, se resalta un ascenso en las tasas de intentos de suicidio en los jóvenes de 10 a 19 años de edad desde el año 2009 hasta el año 2016.

Tasa de Intento de Suicidio en Colombia, de 2009 a 2016, por grupos de edad

EDAD	AÑOS							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
De 10 A 14 Años	0,83	1,07	1,56	1,62	1,76	2,13	2,86	50,94
De 15 A 19 Años	2,53	3,89	5,27	5,21	5,13	6,78	7,49	114,45
De 20 A 24 Años	2,02	2,58	3,35	4,08	3,59	4,84	4,12	80,51
De 25 A 29 Años	1,77	1,91	2,84	2,8	2,58	3,43	2,89	55,44
De 30 A 34 Años	1,05	1,35	1,88	1,81	2	2,5	1,99	41,74
De 35 A 39 Años	0,89	1,09	1,51	1,31	1,4	1,66	1,72	31,15
De 40 A 44 Años	0,58	0,6	0,84	1,12	0,92	1,24	1,56	23,96
De 45 A 49 Años	0,49	0,42	0,73	0,83	0,82	0,94	0,9	18,4
De 50 A 54 Años	0,25	0,26	0,51	0,49	0,83	1,01	0,73	12,74
De 55 A 59 Años	0,4	0,22	0,5	0,58	0,41	0,7	0,47	11,16
De 60 A 64 Años	0,18	0,25	0,31	0,42	0,16	0,42	0,41	8,05
De 65 A 69 Años	0,39	0,1	0,14	0,22	0,33	0,32	0,38	6,09
De 70 A 74 Años	0,43	0,12	0,36	0,65	0,17	0,28	0,27	5,27
De 75 A 79 Años	0,18	0,17	0,08	0	0,23	0,3	0,51	6,71
De 80 Años O Más	0,09	0,17	0,25	0,32	0,31	0,45	0,29	6,9

Fuente: Tabla tomada de Boletín de Salud mental Conducta suicida Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, Ministerio de Salud, agosto de 2018, disponible en:

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/boletin-conducta-suicida.pdf>



De igual manera en las cifras del Ministerio de Salud, categoriza los problemas escolares (6,2%) y el maltrato físico, psicológico o sexual (5,8%) como los principales factores de intento de suicidio, junto a los conflictos de pareja o expareja, los problemas económicos<sup>1</sup>.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el *Boletín Epistemológico Trimestral* presentado en diciembre del año 2013, informa que no se ha sido posible establecer una causa entre el suicidio y matoneo de niños y adolescentes, establece que “vale la pena darle una mirada más compleja al fenómeno del matoneo, entendiendo que este establece una relación dinámica entre dos partes y que víctima y victimario no son siempre categorías que podamos diferenciar fácilmente. Por lo que a la hora de evaluar riesgos de tendencias suicidas debemos prestar atención no sólo a los agredidos sino también a los agresores”<sup>2</sup>.

Pero no el suicidio es una de las causas principales en los jóvenes que son víctimas del matoneo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su página oficial identifica las señales que también puede presentar un niño víctima en su comportamiento las cuales son:

- Tristeza.
- Irritable.
- Ansiedad.
- Dificultad para hacer amigos o hablar en Público.
- Aislamiento.
- Falta de sueño.
- Malas calificaciones.
- Excusas para no ir al colegio.
- Cambio en el apetito y baja de peso.
- Hematomas o heridas en el cuerpo<sup>3</sup>.

Otra de las problemáticas es el consumo de drogas en menores de edad, es una de las causas más en los niños, niñas y adolescentes, cada vez más se ha ido incrementado el consumo de drogas en los menores de edad y la facilidad que tienen

estos para conseguirlas a través y que incluso son suministradas en los propios ambientes educativos, y que se proporcionan a los niños desde edades tempranas regalándoles dulces que contienen componentes adictivos, y ante lo cual muchos padres de familia desconocen dicho problema, por tal motivo la labor del docente que impartirá que va a impartir la cátedra de protección, debe ser fundamental en cuanto a sus conocimientos y actualización de nuevos mecanismos que vulneran a los niños.

El Informe Mundial sobre las Drogas 2018, presentado por la UNODC, presenta que “Según las estimaciones iniciales, 13,8 millones de jóvenes de 15 y 16 años consumieron cannabis en el año anterior en todo el mundo, lo que equivale a una proporción del 5,6%”<sup>4</sup>.

De igual manera y como se ha mencionado anteriormente en ciertos casos los problemas que pueden llevar consigo los jóvenes pueden ser tan un factor determinante para que tomen decisiones como el consumo de drogas, por eso se insiste desde esta iniciativa legislativa sobre la orientación que se debe brindar estableciendo una Cátedra permanente en los entornos educativos, El Informe Mundial sobre las Drogas 2018 de la Naciones Unidas también presenta estos factores de riesgo que pueden llevar a los jóvenes a llegar al consumo de drogas:

“En general, lo que determina la susceptibilidad al consumo de drogas de una persona joven es la conjugación decisiva de los factores de riesgo que están presentes y los factores de protección que están ausentes en una determinada etapa de la vida de esa persona. **Los problemas mentales y conductuales que se manifiestan a una edad temprana, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de implicación de los padres y de apoyo social, la influencia negativa de los compañeros y la falta de medios en las escuelas son más comunes entre los jóvenes que tienen problemas de consumo de sustancias que entre los que no.**”<sup>5</sup> (Negrillas por fuera del texto original).

El acceso a las redes de tecnología también ha sido otro uno de los principales motivos, de los cuales se ha derivado alteración en el comportamiento y sano crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, ya que si bien es cierto los el acceso a la TIC brinda un amplio margen de conocimiento, también se está frente a riesgos de los cuales los jóvenes no ven su dimensión, tales son los casos de extorsión a través de las redes sociales, *bullying* cibernético, secuestro y/o violación de menores por motivo citas realizadas o programadas a través de las redes sociales, ingreso

<sup>1</sup> *Boletín de Salud Mental Conducta suicida* Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, Ministerio de Salud, agosto de 2018, disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/boletin-conducta-suicida.pdf>

<sup>2</sup> *Boletín Epidemiológico Trimestral*, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, diciembre 2013, disponible en: <http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/57949/Quitarse+la+vida+cuando+%C3%A9sta+a%C3%BAn+comienz+a.pdf>

<sup>3</sup> Página Web oficial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, disponible en: <http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ICBFNinos/MitosYVerdades/Violencia/AcosoEscolar>

<sup>4</sup> Informe Mundial sobre las Drogas 2018, UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, disponible en: [https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18\\_ExSum\\_Spanish.pdf](https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf)

<sup>5</sup> Informe Mundial sobre las Drogas 2018, UNODC, Oficina de las Naciones Unidas Contra el Delito y la Droga, disponible en: [https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18\\_ExSum\\_Spanish.pdf](https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf)

a contenido inapropiado para menores de edad, como pornografía, suicidio, asesinatos, juegos para inducir a los jóvenes al suicidio y/o adicción, entre otros y los cuales los padres de familia omiten, porque si bien es cierto dentro del aula de clase se exige por parte de los docentes el no uso de los aparatos electrónicos, estos pueden ser usados en la otros entornos por los jóvenes, llegando a acceder a este tipo de contenidos.

### III. Importancia del proyecto de ley

Las problemáticas mencionadas anteriormente son solo algunas de las muchas que pueden llegar a enfrentar los niños, niñas y adolescentes del país, durante el transcurso de toda su vida, por tal motivo se hace indispensable la creación de la Cátedra de Protección a la Juventud, la cual orientara en gran medida a los jóvenes sobre qué tipo de acciones pueden tomar y los medios que tienen para hacer defender sus derechos, y no caer en el vandalismo, la drogadicción, el *bullying* y otros graves caminos no solo pueden afectarlos a ellos en su crecimiento personal sino también afectar a su familia y a la sociedad en general.

Además cabe destacar que el proyecto de ley contempla un artículo que dispone la Cátedra de Protección a la Juventud, también deberá ir orientada para la formación de los padres de familia, con el fin de que estén informados y tengan conocimiento sobre las acciones y controles que deben llevar a cabo en la educación y formación de sus hijos en el acceso a la tecnología, consecuencias del consumo de sustancias alucinógenas, violencia intrafamiliar y demás problemáticas sociales que afecten los derechos los niños, niñas y adolescentes, a través de los medios que el docente considere pertinentes y verificar que la información efectivamente haya llegado a los padres de familia.

### IV. Fundamento Legal.

- **Constitución Política de Colombia**

**Artículo 44.** Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

**Artículo 45.** El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

- **Código de Infancia y Adolescencia**

**Artículo 7°. Protección Integral.** Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

**Artículo 8°. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.** Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.

**Artículo 20. Derechos de Protección.**

- **Legislación Internacional**

- **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Artículo 10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:**

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

**Artículo 12.**

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:


a) La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

- **Convención sobre los Derechos del Niño.**
- **Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Niños.**
- **Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.**
- **Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.**
- **Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en el conflicto armado.**

**V. Proposición.**

Por lo anterior, ponemos a consideración el presente proyecto de ley, *por medio de la cual se establece y se crea la Cátedra de Protección a la Juventud en todas las instituciones educativas del país.*

Atentamente,



**EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA**  
**Senador de la República**

SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General (Art. 139 y ss Ley 5ª de 1.992)

El día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

se radicó en este despacho el proyecto de ley

Nº. \_\_\_\_\_ Acto Legislativo Nº. \_\_\_\_\_, con todos y

\_\_\_\_\_ uno de los requisitos constitucionales y legales

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SECCIÓN DE LEYES

SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARIA GENERAL

Tramitación Leyes

Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2019

Señor Presidente:

Con el fin de repartir el Proyecto de ley número 178 de 2019 Senado, *por medio de la cual se establece y se crea la Cátedra de Protección a la Juventud en todas las instituciones educativas del país*, me permito remitir a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaría General del Senado de la República por el honorable Senador *Eduardo Enrique Pulgar Daza*. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,

*Gregorio Eljach Pacheco.*

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Septiembre 3 de 2019

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la Comisión Sexta Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado en la *Gaceta del Congreso*.

Cúmplase.

El Presidente del Honorable Senado de la República,

*Lidio Arturo García Turbay.*

El Secretario General del Honorable Senado de la República,

*Gregorio Eljach Pacheco.*



CONTENIDO

Gaceta número 844 - lunes 9 de septiembre de 2019	
SENADO DE LA REPÚBLICA	
PROYECTOS DE LEY	
Proyecto de ley número 173 de 2019 Senado por la cual se reforma la Ley 37 de 1990, se adopta el Código de Ética Profesional del Economista y se dictan otras disposiciones.....	1
Proyecto de ley número 174 de 2019 Senado, por medio del cual se prohíben las carreras ilegales o clandestinas en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.....	18
Proyecto de ley número 175 de 2019 Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes y se dictan otras disposiciones.....	22
Proyecto de ley número 176 de 2019 Senado, por medio del cual se modifican los artículos 365 y 366 de la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano, se reglamenta el porte de armas blancas y se dictan otras disposiciones.....	27
Proyecto de ley número 177 de 2019 Senado, por el cual se establece el Día Nacional de la Coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, se declara monumento nacional y patrimonio histórico de la Nación la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y se dictan otras disposiciones.....	32
Proyecto de ley número 178 de 2019 Senado, por medio de la cual se establece y se crea la Cátedra de Protección a la Juventud en todas las instituciones educativas del país.....	34

